



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

“Análisis jurídico de los marcos sustantivo y adjetivo de la pensión alimenticia a favor de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador”

Tesis previa a la obtención del título de:

ABOGADO

AUTOR: Proaño Gaibor Marlon José

E-mail: marlon_proano@hotmail.com

TUTOR: Dr. Tinajero Valencia Renán Aníbal

Agosto, 2014

Quito

DEDICATORIA

Un agradecimiento especial a mi Madre por todo el esfuerzo y ejemplo de amor, rectitud y sabiduría con los que me guió para ser una persona útil a la sociedad.

A mi mujer y mis hijas, por su apoyo incondicional.

AGRADECIMIENTO

Al finalizar la presente investigación, expreso mi reconocimiento y gratitud al Dr. Renán Aníbal Tinajero Valencia, distinguido Maestro por su invalorable dirección en el desarrollo de esta Tesis

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito, 21 de julio de 2014

PROAÑO GAIBOR MARLON JOSÉ, autor de la investigación, libre y voluntariamente DECLARO, que el trabajo de grado titulado: “ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS MARCOS SUSTANTIVO Y ADJETIVO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR”; es de mi plena autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento único, como mandan los principios de la investigación científica, de ser probado lo contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente,



PROAÑO GAIBOR MARLON JOSÉ

C.C. 1704134766

Correo: marlon_proano@hotmail.com

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, PROAÑO GAIBOR MARLON JOSÉ, en calidad de autor de la tesis denominada por “ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS MARCOS SUSTANTIVO Y ADJETIVO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR” la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 21 de julio de 2014

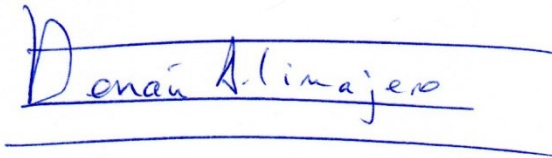


FIRMA

C.C. 1704134766

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Dr. Renán Aníbal Tinajero Valencia, en calidad de tutor del trabajo de titulación, "ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS MARCOS SUSTANTIVO Y ADJETIVO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR" elaborado por Marlon José Proaño Gaibor, egresado de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Derecho, considero que el informe investigativo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación del Jurado Examinador que las autoridades de la Carrera designen.



DR. Renán Aníbal Tinajero Valencia

C.C. 170721182-5

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA



RECIBIDO

2014-08-20

Lita.

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Los miembros del Jurado Examinador aprueban el informe de titulación: “ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS MARCOS SUSTANTIVO Y ADJETIVO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR” la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Para constancia firman

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PORTADA.....	i
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD	iv
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL.....	v
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	vi
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR	vii
ÍNDICE DE CONTENIDOS	viii
RESUMEN EJECUTIVO	xiv
ABSTRACT.....	xv
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I.....	2
EL PROBLEMA	2
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
1.2. NOCIONES GENERALES	2
1.3. DEFINICION DE ALIMENTOS.....	3
1.4. EVOLUCIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS	8
1.5. EL DERECHO DE ALIMENTOS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA	11
1.6. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS	12
1.7. CLASES DE ALIMENTOS.....	15
1.8. OBJETIVOS	20
1.8.1. OBJETIVO GENERAL	20
1.8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	21
1.9. JUSTIFICACIÓN	21
CAPÍTULO II	23

MARCO TEORICO.....	23
OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS	23
2.1. FUENTES DE LA OBLIGACION	23
2.2. FUNDAMENTOS DE LA OBLIGACIÓN	25
2.3. SUJETOS DEL DERECHO DE ALIMENTOS	25
2.5. SUJETOS DE LA OBLIGACION DE ALIMENTOS	37
CAPITULO III	42
3.1. COMPETENCIA	42
3.2. DEL JUICIO DE COMPETENCIA	46
3.3. JUECES DE LO CIVIL Y JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.....	49
3.4. PROCEDIMIENTO	52
3.5. PRUEBA	59
3.6. AUTO DEL JUICIO CIVIL	62
3.7. AUTO DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	63
3.8. JUICIO DE DIVORCIO	65
3.9. INCIDENTES	67
3.10. PENSION PROVISIONAL Y DEFINITIVA	68
3.11. PENSIONES ADICIONALES	75
3.12. CREDITO PRIVILEGIADO	76
3.12. MEDIDAS CAUTELARES.....	78
CAPITULO IV	87
FORMA Y CUANTIA DE LOS ALIMENTOS.....	87
4.1. DETERMINACION PORCENTUAL	88
4.2. LOS AUTOS SOBRE ALIMENTOS NO CAUSAN EJECUTORIA.....	91
4.3. APELACION DE LOS AUTOS SOBRE ALIMENTOS	95
4.4. TERMINACION DEL DERECHO DE ALIMENTOS.....	96
CONCLUSIONES	105
RECOMENDACIONES	108
BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL	110

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA.....	112
------------------------------	-----

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Tabla de pensiones alimenticias 2014	113
Anexo 2: Formulario para demanda de alimentos.....	114
Anexo 3: Tabla de resultados	119

INDICE DE CUADROS

Tabla 1: Resultado de la respuesta a la primera encuesta	119
Tabla 2: Resultado de la respuesta a la segunda encuesta.....	120

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1: Resultados de la pregunta 1 de la investigación.	121
Gráfico 2: Resultados de la pregunta 2 de la investigación.	122

RESUMEN EJECUTIVO

“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS MARCOS SUSTANTIVO Y ADJETIVO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR”

La propuesta investigativa trata de profundizar la problemática del pago de alimentos a favor los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, que trae como consecuencia la inestabilidad social, hogares disfuncionales, deserción de estudiantes en los centros educativos, desnutrición, delincuencia juvenil en diferentes ámbitos, tales como drogadicción , microtráfico de drogas, robo, prostitución infantil. La finalidad de ésta investigación tiene como objetivo, es ser estudiada a profundidad debido a que la falta de pago de las pensiones alimenticias, ataca al grupo humano más vulnerable de la sociedad que son los menores de edad, mismos que está en desventaja frente a su progenitor que en la mayoría de los casos manifiestan ser notoriamente irresponsables con el pago sus pensiones alimenticias, que además son irrisorias, respecto al costo de vida. Para el efecto, se utilizará la respectiva información, a través de técnicas de e instrumentos, tales como la entrevista, la encuesta, además las técnicas de gabinete, por medio de los instrumentos como son las fichas bibliográficas y mnemotécnicas.

Palabras Clave:

- 1.- Alimentos
- 2.- Alimentos congruos y necesarios
- 3.- Competencia
- 4.- Alimentos provisionales y definitivos
- 5.- Medidas Cautelares

ABSTRACT

“LEGAL ANALYSIS OF SUBSTANTIVE AND ADJECTIVE SETTINGS OF ALIMONY FOR CHILDREN AND TEENAGERS IN ECUADOR”

Justice administration has been always reputed for the slow substantiation process of causes brought to the courts. The current research is intended to address said problematic mostly oriented to the juridical analysis of alimony.

Several doctrinal aspects are addressed on referred juridical institution, right to alimony intended to the protection of a vulnerable sector of the Ecuadorian population. There is a research of the legal content of the relevant alternative Ecuadorian legislation regarding the substantive and adjective regulatory body.

The last aspect was specially emphasized by the author, in order show detected, and finally there are several aspects that could be considered to render easy the process around an alimony trial.

Keywords:

1. Alimony
2. Congruo and necessary food
3. Competency
4. Provisional and definitive alimony
5. Cautionary measures

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief.


Ernesto Andino G.
Translator



INTRODUCCIÓN

Hay que señalar que en nuestro país existen dos formas de reclamar alimentos, el uno que está previsto en el Código Civil, en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, trámite que puede seguir cualquier persona que crea tener derechos para reclamar alimentos. En cambio en el Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite especial, que solamente favorece a los niños, niñas y adolescentes y aquellos que estén cursando estudios.

La diferencia entre los dos trámites conforme es de conocimiento general, es que en el sistema civil es más formal, existente y tediosos, conforme lo señala en su tesis de abogacía el compañero Andrés Mensias Ojeda, mientras que en el trámite establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es más rápido.

El compañero universitario Francisco Chacón Ortiz, en su tesis de abogacía, dirigida por el Dr. Gilberto Saltos, señala que la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el R.O. No. 643, de 28 de Julio del 2009, reforma el procedimiento tendiente a reclamar alimentos, haciéndola de una manera más ágil, sin formalidades y de éste modo acogiendo lo que señala el art. 77 de la Constitución de la República, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, en los Artículos 34, 147.12,35, 147.13,

Este tema es importante estudiarlo debido a que un estudiante de derechos que se esta preparando para graduarse de abogado de la República no puede abstraerse de abordar este tipo de temas de contenido social.

Para que las causas sean resueltas de manera diligente es importante la creación de mas operadores de justicia en ésta materia.

Para terminar con la corrupción y dilatoria en la tramitación de los juicios de alimentos y otros, sugiero que se instale un sistema sofisticado de cámaras y micrófonos ocultos a fin de detectar anomalías en los operadores de justicia para que sean removidos de sus funciones al detectar anomalías.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social garantiza los derechos de todos los ciudadanos, sin embargo por décadas se han venido vulnerando los derechos de los menores en el pago a tiempo de las pensiones alimenticias por parte de sus progenitores, sin causa justa, dejando desprotegidos no solo a sus hijos, sino también a sus cónyuges, ocasionando a la familia núcleo fundamental de la sociedad un desequilibrio en el orden emocional, económico y social , trayendo como consecuencia desesperación por no poder cubrir con sus necesidades básicas.

Por otro lado el Estado al no preocuparse de los menores crea una inseguridad jurídica siendo su papel principal velar por los derechos de sus menores consagrados en la Constitución de la República de Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia, principios que protegen a los menores, pero al dejarlos desprotegidos sin el derecho a reclamar alimentos, no está garantizando dichos derechos e indirectamente esta provocando gravísimos problemas de orden social.

Para ello es necesario que exista un cambio en la mentalidad de los padres y de los órganos encargados de la administración de la justicia para que se lleve a efecto el bienestar de los menores.

Por todo lo manifestado anteriormente considero importante endurecer las penas para los padres desnaturalizados que no cumplen oportunamente con el pago de sus obligaciones.

1.2. NOCIONES GENERALES

La obligación de prestar alimentos, esto es, de proporcionar recursos necesarios para la subsistencia, habitación, vestuario y gastos por enfermedad de una persona, puede nacer tanto

de la ley como de una disposición de última voluntad y, aún, de un delito (por lo menos en el derecho romano): Dig., IX, 3, 7). Es en el derecho de familia donde se comprueba la definición que Ulpiano da del derecho natural, pues, el deber de alimentar a la prole es la ley de las especies animales superiores.

El derecho positivo no sólo ha sancionado esta obligación, sino que la ha extendido bajo la influencia de factores que derivan de la solidaridad familiar o, simplemente de la moral; de allí que no sean los descendientes los únicos que gozan del derecho a reclamar alimentos; también los ascendientes de sangre o políticos lo tienen; aún los hermanos, se deben alimentos entre sí.

En cambio, en el segundo grado colateral, prestar alimentos a un sobrino o a un primo puede considerarse como un acto de conciencia, que más bien entra en el campo exclusivamente moral; no es en principio una obligación legal. (Arias, Derecho de Familia, Segunda Edición, págs. 55-56)

1.3. DEFINICION DE ALIMENTOS

Escriche se refiere a los alimentos, según una definición tomada de las Partidas: como las asistencias que se dan a alguna persona a quien se debe por ley para su manutención y subsistencia; es decir: para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud.

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral que consiste en la obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe una especial gratitud. El derecho generalmente contempla en términos positivos, los deberes que en forma abstracta impone la justicia, tomados como una acción de caridad. (Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, pág. 709)

No nos debe sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan tenido gran desarrollo gracias al cristianismo, generalmente reconocida como la religión de la caridad para con el prójimo. En el Derecho Civil ecuatoriano, desde la promulgación del Código, se han producido

cambios de mucha importancia en la materia. Quizá el más notable, consiste en la supresión de la asignación forzosa de alimentos, reforma que se produjo en 1956. Desde entonces en el Ecuador solamente el sujeto directamente obligado, y no sus herederos, deben pagar alimentos. (Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, pág. 710)

La Jurisprudencia en nuestro país, en términos generales, se muestra cada vez más amplia en cuanto a la concesión de alimentos, cuya cuantía ha ido variando gradualmente de acuerdo con los cambios de las condiciones de vida. (Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, pág. 711)

En el Ecuador, el derecho de alimentos ha tomado un gran desarrollo, independientemente del Código Civil, y se debe al sistema introducido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, que permite asignar el derecho de alimentos, sin seguir los moldes propios del Derecho Civil, sino de conformidad con criterios especiales y aceptando pruebas distintas de las usualmente utilizadas en esta rama del Derecho.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define al término alimentar como:

- 1.- Dar alimento.
- 2.- Suministrar a un organismo lo necesario para su desarrollo.
- 3.- Dar energía a una máquina para que funcione.
- 4.- Fomentar hábitos. Vicios, etc.; y,
- 5.- Suministrar alimentos.

En lenguaje jurídico, este significado no coincide con su acepción gramatical, ya que éste último se refiere únicamente a la nutrición; en tanto que, en sentido jurídico comprende todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades básicas de una persona.

Nuestra legislación civil no define con claridad la obligación legal de dar alimentos. El artículo 358 del Código Civil, señala que los alimentos no se deben, sino solamente cuando los medios

de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, o para sustentar la vida.

Para Víctor Hugo Bayas, el término alimentos en Derecho tiene un sentido técnico ya que, no solo comprende la nutrición, sino todo aquello necesario para la vida, incluyendo los gastos accidentales, como los de una enfermedad.

Federico Puig Peña, Luis Claro Solar y Pedro Fueyó coinciden con lo expresado; es decir, que los alimentos no deben ser entendidos como tales, sino que se incluyen otras necesidades básicas, importantes para la existencia de todo ser humano, como alimentación, vivienda etc.

El tratadista Osorio (Osorio, 1982, pág. 50), en su libro de Ciencias Jurídicas, señala que: *“Alimento, es la prestación de alimentos, en dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia; es todo aquello que, por determinación de la ley o por resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados”*.

El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da entre parientes legítimos por consanguinidad como el padre, la madre y los hijos; a falta de los padres, o no estando en condiciones de darlos, tienen la obligación de hacerlo los abuelos y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí.

En el parentesco legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos al suegro y la suegra, por el yerno y la nuera y viceversa, de ser éstos los necesitados y aquellos los pudientes.

El derecho de alimentos atañe al Estado, la sociedad y la familia; consecuentemente, rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar. El bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad que debe ser asumida y compartida, en primer lugar por los padres, por el Estado y por las leyes. En consecuencia, quien deba prestar alimentos, en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas cautelares. Este derecho de

subsistencia o de sobrevivencia, por ser intrínseco a todo niño, niña y adolescente, prevalece sobre todo derecho, cualquiera sea su naturaleza.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Art. 127, manifiesta que: *“este derecho nace como efecto de la relación parento-filial, mira al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, imprescriptible y no admite compensación.*

Tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aún en caso de sentencia judicial que declare inexistente la causa que justificara el pago. Esto no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas y se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten activa y pasivamente a los herederos y la acción para demandar su pago prescribe según lo dispuesto en el Art. 2415 del Código Civil.

(Somarriva Undurraga, pág. 614), en su libro “Derecho de Familia”, manifiesta que: *“uno de los derechos más importantes que emanan de las relaciones de la familia es el derecho de alimentos, que se deben entre cónyuges, ascendientes y descendientes legítimos, entre padres e hijos naturales, entre adoptante y adoptado y que aún tienen derecho a alimentos los hijos ilegítimos y la madre ilegítima”.* (6)

En la legislación ecuatoriana, el Libro I, título XVII del Código Civil, trata sobre *“Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas”*. El derecho que tiene una persona a exigir alimentos de otra con la cual, generalmente, se encuentra ligada por el parentesco, se fundamenta en el Derecho Natural; en consecuencia, el legislador, al establecerlo en la ley, lo reconoce como un derecho más fuerte que la misma ley y le confiere una mayor importancia.

El artículo 351 del Código Civil, en su inciso final dispone que *“Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos la enseñanza primaria.*

Como bien expresa el legislador, el derecho de alimentos, denominado también de sobrevivencia, es consecuencia de una relación de parentesco y filiación, porque no solo los progenitores están obligados a proporcionarlos, sino que también están obligados los hermanos, abuelos y tíos.

En la obra “*El Menor ante la Ley*”, los doctores (Wray, García, & Larenas , 1999, pág. 73), señalan que “*El Código de Menores*”, (actual Código de la Niñez y Adolescencia), establece que el padre y la madre tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos y que tal obligación comprende la satisfacción de las necesidades de subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica (Art. 129. C.M.)

El Código Civil, en cambio, se limita a expresar que “*a los hijos se deben alimentos congruos; es decir, los requeridos para subsistir modestamente, de acuerdo con la posición social. Si son menores, la obligación incluye proporcionales cuando menos la enseñanza primaria*”.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Título V, Arts.126 al 147, promulgado para velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes, no incluye, en el derecho a reclamar alimentos a los hijos de cualquier edad como lo hace el Código Civil que tiene una aplicación más amplia y se refiere a los hijos de cualquier edad, no solamente a los menores.

Países como Cuba, donde el código respectivo, indica el alcance de este derecho y especifica que para el caso de los menores, comprenderá también, lo que concierne a “*educación, recreación y desarrollo*” (Art. 121 C.F.).

En Colombia, La Ley Orgánica de Defensa del Niño, postula como principio general, que todo niño tiene derecho a gozar de las condiciones básicas que aseguren su desarrollo corporal, su educación moral e intelectual y su bienestar social (Art. 69 LODN), obligando a los padres al sostenimiento y sustentación material de sus hijos.

En nuestro país, el Código Civil, establece una diferencia en el derecho de alimentos, entre congruos y necesarios; siendo alimentos congruos, los que se dan en un monto que permita

sobrevivir al alimentante modestamente, de una forma correspondiente a su posición social (Art. 351, inc. 1 C.C.), a éstos tienen derecho los hijos sin consideración a su edad; y, si son menores, comprende la obligación de proporcionarles al menos la enseñanza primaria”. *En cambio, los alimentos necesarios, son los que le dan lo que basta para sustentar la vida*” (Art. 351, inc.2).

(Orbe, 1995, pág. 203), en su obra Derecho de Menores, manifiesta que “*Los alimentos, Institución de Derecho Civil, fue incorporada como institución para la protección de los menores en la legislación tutelar*”.

(Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, pág. 252), se refiere al término “*Alimentos*”, como *las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, contrato o testamento, se da a una o más personas para su manutención y subsistencia; o sea, para comida, bebida, vestido, habitación y recobro de salud, además de la educación e instrucción, cuando el alimentista es menor de edad*”.

Los autores arriba mencionados, al referirse al derecho de alimentos que tienen los menores, coinciden en que éstos se clasifican en congruos y necesarios; se deben por derecho, por razón y por justicia y que los obligados a proporcionarlos son los padres; alimentos que comprenden: subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante.

Es importante mencionar que el derecho de alimentos nace, con el propósito fundamental, de brindar protección a los menores en su desarrollo integral; derecho que tiene las características de ser: intransferible, irrenunciable imprescriptible e inembargable.

1.4. EVOLUCIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La obligación del estado de prestar alimentos a los menesterosos es muy antigua. En Roma, el emperador Trajano estableció la obligación alimentaria y sus sucesores completaron el sistema, a pesar de que los romanos primitivos desconocieron la obligación de prestar alimentos, porque

los poderes del pater familias eran absolutos y absorbían todos los derechos de los integrantes de la domus. (Arias, Derecho de Familia, Segunda Edición, págs. 56-57)

Es con los emperadores cristianos con quienes aparece este deber, que llega a ser más amplio aún que en nuestra legislación positiva, pues se lo impone a los herederos del deudor de los alimentos, en caso de suma necesidad.

Más tarde, en el Derecho Romano se amplía el campo de aplicación en lo referente a la obligación alimenticia recíproca entre descendientes y emancipados, inclusive pudiendo establecerse esta obligación mediante asignación testamentaria.

El Derecho Germánico estableció la obligación alimenticia inspirada exclusivamente en el carácter familiar, hallándose reglamentada alguna relación jurídica que exceda del derecho familiar, tal como la donación de alimentos.

El Derecho Griego reguló la obligación alimenticia siempre que exista el reclamo que provenga de la viudez y del divorcio. La Legislación Española reglamentó el procedimiento, modalidades y características de las obligaciones alimentarias desde las Partidas.

En épocas modernas la obligación alimenticia del Estado, tiene un sentido humanitario y en otras ocasiones, es un deber legal.

En los regímenes feudales se conocía la obligación alimentaria entre el señor y el vasallo así como en el ámbito familiar, de acuerdo a las características del régimen. El Derecho Canónico ha sido el que con mayor profundidad trata el Derecho de los Alimentos y es quien reglamenta la obligación entre parientes.

El derecho a pedir alimentos y la obligación legal de darlos, han pasado al derecho moderno, con los mismos fundamentos del antiguo, sustituyendo las invocaciones de orden religioso, por

razones de orden legal. El Derecho Civil Ecuatoriano, desde que se expidió no se le ha dado cambios fundamentales; lo más destacable puede ser la supresión de la asignación forzosa, producida en 1956.

En consecuencia, en la Legislación Ecuatoriana, solo el sujeto directamente obligado, y no, sus herederos deben prestar alimentos. En todo caso, estos gravámenes no influyen de ninguna forma que puedan obligar a la devolución de lo percibido en concepto de alimentos, pero si influye en que pueden mermarse los alimentos futuros, cuando fueren exagerados, tomando en cuenta el caudal de la masa sucesoria.

La eliminación de las calidades legales de los parentescos ha dado origen a una simplificación en la materia. Ahora se deben alimentos al cónyuge, a los hijos, a los descendientes, a los padres, a los ascendientes, a los hermanos, al que hizo una donación cuantiosa no revocada; a los cuatro primeros se deben alimentos congruos y al último de los nombrados, solamente alimentos necesarios.

En vista de que la mayoría de edad se cumple a los 18 años, a esta edad se redujo el límite hasta el cual se pueden exigir alimentos, salvo incapacidad para ganarse la vida, pues existe jurisprudencia que dictamina el pago de alimentos hasta cuando el alimentado, adquiriera por lo menos una profesión.

Desde hace algunos años, en nuestro País, el derecho de alimentos ha evolucionado independientemente de lo que establece el Código Civil, con la introducción del Código de la Niñez y la Adolescencia, que permite a tribunales especiales, asignar alimentos de acuerdo a criterios especiales y aceptando nuevas pruebas de las usuales, apartándose de lo que dispone el Derecho Civil.

1.5. EL DERECHO DE ALIMENTOS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA

El objeto de este punto es analizar las principales disposiciones del Derecho de Alimentos que constan en la Constitución. En La Constitución Política del Ecuador vigente, Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes, Art. 45 señala en forma general y, entre otros derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes, los siguientes: que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

(Larrea Holguín, 1968, págs. 712 , 713)

El Art. 46, en la parte pertinente, manifiesta que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: *...atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos...*

De lo antes anotado podemos concluir que, en la Constitución Política vigente, no encontramos una norma expresa que se relacione con los alimentos; tampoco menciona a alimentantes, alimentarios, así como, las obligaciones recíprocas entre unos y otros.

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS

Las principales características del Derecho de Alimentos señaladas en nuestro Derecho son las siguientes:

- a) Constituyen un derecho especial;
- b) No son comerciales;
- c) No admiten compensación
- d) Se diferencia de las pensiones atrasadas;
- e) Tienen carácter permanente;
- f) Su monto es relativo y variable.

En su obra Derecho de Familia, el autor (Somarriva Undurraga, pág. 622), manifiesta: *“Características del derecho de alimentos.- El Derecho de alimentos tiene el carácter de personalísimo, porque está establecido en consideración a la persona del alimentario. Es, entonces, un derecho intransferible”*.

De lo antes mencionado podemos destacar los siguientes aspectos importantes:

1. INTRANSFERIBLE

De conformidad con el artículo 362 del Código Civil, el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o sucederle de modo alguno, ni renunciarse; es intransferible por actos entre vivos e intransmisible por causa de muerte; es decir, que este derecho no pasa a los herederos y no puede cederse ni venderse. En caso que así sucediera, habría objeto ilícito en virtud de lo dispuesto; por lo tanto, el acto o contrato adolecería de nulidad absoluta.

2. IRRENUNCIABLE

El derecho de alimentos también es irrenunciable. El artículo 362 del Código Civil establece que el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. Su renuncia adolecería de nulidad absoluta; en consecuencia, queda prohibido que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho de alimentos.

Los progenitores, tutores, parientes, o terceras personas bajo las cuales se halle su cuidado, no deben ni pueden renunciar a este derecho; es irrenunciable, queda prohibido que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho de alimentos.

Lo que en el párrafo anterior se expresa, no es aplicable a las pensiones atrasadas, las mismas que podrán renunciarse o compensarse y el derecho a demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripción que compete al deudor, de conformidad con lo que prescribe el artículo 364 del Código Civil vigente.

3. IMPRESCRIPTIBLE

Este derecho es imprescriptible, lo que significa que el alimentario en cualquier momento puede pedir alimentos, siempre que concurren los requisitos exigidos por la ley. Sin embargo, el varón que solo tuviere derecho a alimentos necesarios, no puede exigirlos después que haya cumplido veintiún años, salvo que por algún impedimento corporal o mental se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo.

4. INEMBARGABLE

Asimismo, el derecho de alimentos es inembargable.

5. INTRANSMISIBLE

El derecho de alimentos no es susceptible de ser transmitido por sucesión o por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y ser un derecho personalísimo, éste se extingue con la muerte del titular.

El Art. 362 del Código Civil prescribe que: *“el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”*.

En cuanto a la transacción sobre este derecho, cuando se trata de los alimentos futuros, el Código acepta, bajo ciertas condiciones: *“la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá el juez aprobarla.* (Somarriva Undurraga, pág. 623)

Excepcionalmente, el legislador permite transigir sobre las cuestiones de alimentos, porque puede ser beneficioso para el alimentario, con ello se evita un juicio o se pone fin al que amenaza ser de larga duración. Pero, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley, exige que la transacción sea aprobada judicialmente.

La falta de aprobación judicial traería consigo la nulidad absoluta de la transacción, ya que este es un requisito que se exige en consideración al acto en sí mismo y no al estado o calidad de las personas que contratan, porque, cualquiera que transija sobre alimentos, sea capaz o incapaz, debe cumplir con este requisito.

El juez no aprobará la transacción; esto se explica porque la transacción es un contrato complejo que lleva en sí mismo involucrada, la celebración de varios actos o contratos. Cuando en el fondo, la transacción signifique una renuncia, cesión o compensación del derecho de alimentos, el juez no puede autorizarla y si, a pesar de todo, así lo hace, habría nulidad absoluta”.

Al respecto, el tratadista Torres (Torres Chávez, 2003, pág. 97), en su obra, Breves comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia, expresa: *“Art. 127.- Naturaleza y Caracteres.- Este*

derecho nace como efecto de la relación parento-filial, mira al orden público familiar y es intransferible, intransmisibile, irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación”.

Tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aún en el caso de sentencia judicial que declare inexistente la causa que justificara el pago. Esto no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas y se encuentran adeudadas.

Las que podrán compensarse, se transmiten activa y pasivamente a los herederos, y la acción para demandar su pago prescribe según lo dispuesto en el Art. 2415 del Código Civil, que establece que el tiempo para la prescripción extintiva es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias.

Es irrenunciable, queda prohibido que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho de alimentos. Los progenitores, tutores, parientes, o terceras personas bajo las cuales se halle su cuidado, no deben ni pueden renunciar a este derecho.

Lo que en el párrafo anterior se expresa, no es aplicable a las pensiones adeudadas, las mismas que pueden compensarse y se transmiten a los herederos. De conformidad con el Art. 2439 del referido Código, el que establece que la prescripción para las acciones ejecutivas es de 5 años, y 10 para las ordinarias.

1.7. CLASES DE ALIMENTOS

De conformidad con el Art. 351 del Código Civil codificado, publicado en el Registro Oficial No. 46, de 24 de junio del 2005, determina que, los alimentos se dividen en: congruos y necesarios.

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de modo correspondiente a su posición social. Necesarios son los que le dan lo que basta para sustentar la

vida. Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la enseñanza primaria.

El jurista Larrea (Larrea Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, págs. 446 , 447), en su obra dice que los alimentos pueden ser congruos o necesarios; devengados o futuros: provisionales o definitivos. Los congruos se definen como los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición social; mientras que son necesarios, los que bastan para sustentar la vida

En consecuencia, los alimentos congruos tienen un carácter más relativo y variable de persona a persona. Lo que es congruo para una persona de muy humilde condición social, no sería congruo para otra persona de superior posición.

Hay exigencias que dependen de la condición social, que los alimentos congruos deben satisfacer, aunque siempre en una medida moderada, sobria. En cambio, los alimentos necesarios, si bien pueden también variar de persona a persona, no toman en cuenta su posición social; puede variar su cuantía, más bien por otras razones; por ejemplo, por la buena o mala salud, las variaciones del costo de la vida en distintos lugares y tiempos.

Se deben alimentos congruos: al cónyuge, a los hijos, a los descendientes, a los padres y al que hizo una donación cuantiosa. Pero todas estas personas pierden el derecho a los alimentos congruos si cometen injurias graves contra el alimentante.

También pierden el derecho a los alimentos congruos y se reducen a los simplemente necesarios, *“cuando la ley los limita expresamente a lo necesario”* y esto sucede en el caso del hijo de familia ausente del hogar y que observa mala conducta. (Art. 352 C.C.). Les corresponde recibir alimentos necesarios a los ascendientes y a los hermanos.

Se llaman alimentos devengados los que corresponden a un período de tiempo que ya ha transcurrido. Alimentos futuros son lo que se refieren al tiempo que aún no llega.

Esta clasificación se refiere más exactamente a las pensiones alimenticias devengadas o futuras y tiene gran importancia para distinguir si cabe o no transacción, cesión, prescripción, etc., que solamente se aplican a los alimentos ya devengados y en ningún caso a los futuros.

Son alimentos provisionales los que señala el juez desde que aparece en el juicio fundamento razonable y están destinados a cubrir las necesidades del reclamante, mientras se ventila el juicio. Los alimentos provisionales se deben restituir si resulta que el reclamante no tubo derecho para pedirlos, salvo que haya actuado de buena fe o con fundamento razonable para demandarlos.

En cambio se llaman alimentos definitivos, los que se fija en la sentencia que termina el juicio. Sin embargo, los alimentos definitivos no lo son nunca en sentido absoluto, porque siempre cabe modificación de su cuantía, al variar las circunstancias del alimentante o del alimentado, o por variaciones notables del costo de la vida, desvalorización de la moneda, etc., por lo cual aún los alimentos definitivos, conservan siempre un carácter relativamente provisional.

Los alimentos por su amplitud, pueden ser naturales y civiles. Los primeros, son aquellos suficientes para la subsistencia del alimentista; los segundos, además, deben tener en cuenta el estado y circunstancias del beneficiado.

Por su origen, los alimentos pueden ser: legales, contractuales o testamentarios. Caso especial es el de la donación, por la cual el donatario está obligado a prestar alimentos al donante, si bien tal deber se extingue cuando existen parientes con obligación preferente de prestar alimentos al donante, (salvo que la deuda alimenticia se hubiera configurado como independiente de la libertad).

Guillermo Cabanellas, por su parte, en su Diccionario Jurídico Usual, determina que los alimentos se clasifican en: legales, voluntarios y judiciales. Según el Diccionario Jurídico del Dr. Manuel Sánchez Zuraltz, los alimentos que en juicio sumario, y con carácter provisional, fija el juez a quien los pide alegando derecho para ello y necesidad urgente de recibirlos, pueden ser: legales, voluntarios, judiciales, provisionales y definitivos; congruos y necesarios.

El Art. 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia, determina la exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que las leyes reconocen a favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más leyes establezcan para el efecto.

Sin embargo, y de conformidad con el Art. 127, inciso segundo del antes mencionado Código, cuando las pensiones alimenticias se hayan convertido en una deuda por falta de pago o no se hayan ejecutado las acciones permitidas, el referido Código manifiesta que tales deudas alimentarias se podrán ser compensadas, transmitidas activa o pasivamente a los herederos y ,hasta, prescribir.

El Art. 2415 del Código Civil, al referirse al tiempo para la prescripción extintiva dice:

“Este tiempo es, en general, de cinco años para la prescripción extintiva y de diez para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años; y convertida en ordinaria, durará solamente cinco”.

Adicionalmente, el Art. 364, del Código Civil, refuerza la excepción constante en el inciso segundo del Art. 127 del Código de la Niñez y la Adolescencia, al manifestar que:

“No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse, o compensarse, y el derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, sin perjuicio de la prescripción que compete al deudor”.

Bajo esta excepción, el derecho de demandar por las pensiones alimenticias atrasadas, puede transmitirse por causa de muerte, renunciarse, compensarse, venderse o cederse. (Bossano), al respecto sostenía que:

“Se entiende que el alimentario gozaba de ese derecho, que es realmente un crédito y en virtud de ello, al morir transmite a sus sucesores del derecho de exigir el pago de la deuda. No les está vedado el reclamar lo que debió a su causante, pero si el reclamar alimentos invocando su calidad de causahabientes del alimentario”.

Para cobrar los alimentos la ley confiere derecho de recurrir al apremio personal (Art. 928 C.P.C.), es decir hacer tomar preso al deudor con el fin de que pague; importante excepción al principio de que no hay prisión por deudas, principio que se halla expresamente declarado en la Constitución de la República, pero haciendo expresa salvedad en el caso de las deudas alimenticias forzosas.

Además del apremio personal, se puede recurrir al apremio real, solicitando el embargo y remate de bienes del deudor, (Art. 944 C.P.C.). La ley también permite que se embarguen bienes que son inembargables para hacer efectivo el pago de alimentos.

El Código del Trabajo declara inembargable la remuneración del trabajador, salvo en el caso de pensiones alimenticias. Lo mismo establece la Constitución.

La deuda de alimentos debe pagarse con preferencia, aún de los créditos públicos y, si dentro del juicio de coactiva para exigir el pago de éstos, se presenta como tercerista un acreedor de alimentos, se debe enviar los autos al Juez ordinario para que ante él haga valer su derecho preferente. Existe jurisprudencia respecto de los privilegios excepcionales que protegen a los alimentos que no se extienden a las pensiones atrasadas, por las cuales no se puede recurrir al apremio personal.

Según Planiol y Ripert, la deuda alimenticia no es solidaria, ni indivisible; se trata de varias deudas, tantas como parientes obligados haya. Por ello, si uno paga puede repetir, siempre que haya reclamado oportunamente el concurso de otros parientes para cubrir la obligación alimenticia. El reparto podría ser desigual y si uno de los deudores fuera insolvente, no se descargarían de su obligación a los demás. (Albán Escobar, págs. 149 , 151)

Fueyo sostiene que si el obligado no tiene bienes suficientes, debe prorratearse la deuda entre los varios obligados en igual grado, pero el mismo acreedor podría pedir parte de sus alimentos a uno y otra parte a otro.

Arias sostiene que la deuda alimenticia es divisible y no solidaria. Borda dice:

“quien hubiere sido condenado a pasar alimentos o lo hiciere voluntariamente de acuerdo con el derecho, puede exigir de los otros parientes obligados en igual rango, que contribuyan al pago de la pensión.

(Borja, Roger, & Chernovez, 1908), es de la opinión de que:

“cuando hay insuficiencia en el título, el alimentario procedería acertadamente demandando a un mismo tiempo a dos o más personas, aun cuando los títulos se hallen en dos o más casos determinados por la ley”. O sea, si el principal obligado no tiene posibilidad de cumplir con el deber alimenticio plenamente, y debe ser completada la pensión por otro u otros, se puede demandar a varios”.

1.8. OBJETIVOS

1.8.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer con precisión la falencias jurídicas tanto sustantivas como procesales que conllevan a la falta de pago de pensiones alimenticias a los menores, lo que vulnera el derecho de estos a tener una vida digna para contar con los recursos económicos necesarios para su sustento diario, derechos que se hallan consagrados en la Constitución de la República, en el Código de la Niñez y de la Adolescencia y, en el Código Civil en vigencia, siendo necesarias las reformas para proteger a este sector vulnerable de la población.

1.8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Precisar que la falta de pago de alimentos, responde más bien a una arbitrariedad e irresponsabilidad escudándose en argucias legales y en lo engorroso de los procesos en su sustanciación, por parte de la persona llamada a proveer de alimentos a los menores.

-Determinar que la falta de pago de las pensiones alimenticias provoca daños económicos y afectivos a los menores.

1.9. JUSTIFICACIÓN

En este sentido la propuesta es más que justificable, en la medida de que se trata de una problemática actual, vigente, cotidiana, que tiene que ser asumida con absoluta responsabilidad.

La presente investigación que abordaré nace de la preocupación que como estudiante de Derecho y como persona sobre la vulneración de los derechos de los menores a través del incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, específicamente durante la sustanciación de los juicios de alimentos

Los derechos de los menores deben ser protegidos de las ilegalidades e inconstitucionalidades de sus progenitores. La justificación entonces ha de girar sobre la preocupación de los derechos de alimentos que por Ley se deben de proveer a los menores y a la desidia e irresponsabilidad de sus padres, a los que hay que adicionar necesariamente a los administradores de justicia.

En esta circunstancia no solamente que la investigación plantea un diagnóstico, sino que también da las soluciones y salidas legales pertinentes para el tema propuesto.

Tal problemática no debe ser abordada solo individualmente sino que debe ser motivo de discusión por parte de toda la sociedad y en especial por los operadores de justicia, en virtud de que la falta de pago de pensiones alimenticias, atenta contra los derechos de los menores consagrados en la Constitución, lo cual no consiste, ni debe consistir en una mera declaración

de derechos , ya que en el entorno que hoy vivimos , conocemos que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, que debe velar por el bienestar de sus ciudadanos, en especial por los sectores mal vulnerables, y como en el caso del tema objetivo de la presente investigación los menores de edad.

Cabe resaltar que los menores forman parte principal de un Estado por sus características propias de vulnerabilidad e indefensión frente a sus progenitores.

La falta de pago de pensiones alimenticias de forma irresponsable y unilateral, provoca inestabilidad emocional, económica y social, para cubrir sus necesidades básicas, la insuficiencia de sus ingresos económicos paraliza el nivel de vida y el futuro del menor.

Por todas las razones antes expuestas tengo particular interés en investigar y profundizar en los temas que provocan este incumplimiento de un deber supremo como lo es el de alimentos, cuya finalidad es la de proteger y beneficiar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en relación de desventaja con sus progenitores, por que su única arma para defenderse de la arbitrariedad e irresponsabilidad por parte de su padre es únicamente el llanto desgarrador que llega a oídos sordos de progenitores y operadores de justicia.

Por eso se justifica la temática del presente estudio, puesto que la falta de pago de las pensiones alimenticias, violenta disposiciones constitucionales relativas a proteger el Derecho de los menores a obtener alimentos, resulta peligroso que su progenitor, en forma unilateral niegue el derechos de alimentos que por Ley debe proveer a sus hijos.

CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS

2.1. FUENTES DE LA OBLIGACION

La obligación de dar alimentos puede originarse en actos voluntarios, como los contratos o disposiciones testamentarias, o directamente de disposiciones legales que consagran principios de justicia, caridad o simple equidad naturales.

La primera división de alimentos resulta de los voluntarios y los debidos por ley o legales.

En cuanto a los alimentos legales, para unos, éstos se deben en virtud de un cuasi contrato que se establece con la misma generación, pero esta explicación no es suficiente: no daría fundamento a los alimentos entre cónyuges, ni a favor del que hizo una donación cuantiosa, etc. Otros, hablan de un anticipo de herencia, o que resulta aún menos admisible. Puig Peña se refiere a la solidaridad que resulta de los vínculos de sangre, y esta explicación satisface más, pero tampoco explica todos los casos de alimentos debidos por ley.

Hay que concluir que es una veces la justicia, otras la caridad, las que imponen el deber alimenticio en un orden razonable que comienza por los más íntimos y se extiende hasta otras persona, aunque no sean parientes, a quienes la equidad hace también acreedoras de estos auxilios.

Algunos autores, como (Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, págs. 717 , 718), admiten que los alimentos puedan originarse en un hecho ilícito; como cuando como

consecuencia de un hecho ilícito fallece el alimentante de otra persona que queda desamparada; o cuando la víctima de una agresión quedara incapacitada para ganarse la vida.

Pero en estos casos, en nuestro derecho, da más bien lugar a una indemnización que se paga de una sola vez, y aún en el caso de transformarse en una pensión periódica, no se tratará propiamente de los alimentos regulados por la ley civil.

En el aspecto más inmediato, se puede decir que las fuentes del derecho de alimentos necesarios en nuestra legislación positiva son: el matrimonio, el parentesco, las donaciones cuantiosas y las herencias abiertas en el caso de la extinguida muerte civil.

Los alimentos voluntarios, a su vez, se pueden establecer mediante un contrato, un acto de donación o testamentario. En la práctica, son muy raros los casos de alimentos establecidos mediante contrato, y aún los provenientes de acto testamentario no son frecuentes.

La ley no es una verdadera causa generadora de obligación, como causa exigente, sino que confirma una causa existente que es un elemento natural como el vínculo de familia y que el legislador lo ha traducido en normas imperativas que ha creído necesario admitirlas como tales, dándoles un carácter forzoso independiente de la voluntad del obligado

La obligación alimenticia no se concibe sin una ley. Es menester señalar que la ley establece el principio esencial que es el de la reciprocidad de la obligación alimenticia, reciprocidad que es causa eficiente de la obligación. El vínculo de familia que les une entre sí es fuente para obligarlos a prestar alimentos, así mismo, debe ser lo suficientemente fuerte para obligar a darlos cuando las circunstancias varíen.

Los alimentos que se establecen por actos como donación o asignación testamentaria, son poco frecuentes.

2.2. FUNDAMENTOS DE LA OBLIGACIÓN

Algunos autores establecen como fundamento de la obligación alimenticia la indigencia de la persona que los reclama. La indigencia es un hecho personal de cada individuo y no puede ser fuente de derecho para que otra persona a quien este hecho le es ajeno. Puede nacer una relación de derecho entre dos personas unidas por un vínculo de parentesco, por encontrarse una de ellas en la indigencia y no poder suministrar para sí misma lo necesario para subsistir.

La indigencia en sí misma no es causa generadora de la obligación, sino más bien una condición del ejercicio de ella. La causa generadora de la obligación es externa a la indigencia y la relación jurídica que ella crea es un efecto de la relación natural del parentesco que es la causa de dicha obligación.

Para que la obligación alimenticia pueda producir sus efectos es necesario que el acreedor se encuentre en la indigencia y que el deudor tenga suficientes recursos para satisfacer esa obligación, entonces la obligación alimenticia tiene se fundamenta en la indigencia de quien la invoca y en el bienestar de aquel contra quien se alega.

Los alimentos pueden solicitar solamente las personas que se hallan en la indigencia y deben ser entregados por personas que gozan de fortuna. Las relaciones de familia, son el vínculo fundamental para el ejercicio de esta obligación.

2.3. SUJETOS DEL DERECHO DE ALIMENTOS

El Código de la Niñez y Adolescencia regula el derecho de los alimentos de niños, niñas, adolescentes no emancipados, adultos hasta la edad de veintiún años en circunstancias que cursan estudios superiores y carecen de recursos propios y suficientes, así como las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales, empero, para hacerse merecedor de este derecho constitucional, es elemental que exista la facultad que dé inicio a este derecho, esto es, la existencia de la partida de nacimiento del descendiente del alimentante.

(Córdova, pág. 247), en su obra Derecho Civil Ecuatoriano, expresa:

“Los alimentos no se conceden sino en proporción de la necesidad del que los reclama, y de la fortuna del que los debe dar. Los alimentos comprenden cuanto es necesario e imprescindible para vivir. Cuando el que da, o el que recibe alimentos se pone en estado de no poderlos dar, o de no necesitarlos, se puede pedir la exoneración absoluta o la reducción de ellos”.

El artículo 349 del Código Civil enumera las personas que tienen derecho a recibir alimentos, a las cuales solamente cabe agregar el caso del fallido al que se refería el Código de Procedimiento Civil en su artículo 621 que manifestaba que de los *“auxilios alimentarios y gastos de defensa que hayan sido asignados al fallido”*.

Tedeschi encuentran el fundamento de la obligación alimenticia en el interés público del Estado de estar pendiente en el cuidado de los indigentes. El fundamento de la obligación alimenticia radica en el vínculo familiar; sin embargo, el Estado debe procurar el bienestar de los indigentes, por lo tanto existe un interés público del Estado para con ciertos miembros de la sociedad que necesitan de su ayuda y cuidado por lo que se convierte en un interés social. (Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, pág. 719 y 720)

Todos los miembros de la sociedad, tengan o no parientes, tienen el derecho a la vida, principio que es garantizado por la Constitución. Este derecho a la vida, es el verdadero fundamento de la obligación alimenticia, que debe ser tutelado por el ordenamiento jurídico a través de normas de derecho público y privado.

Es opinión (Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, pág. 721), que si la persona que debe dar alimentos justifica que no puede pagar la pensión alimenticia, el juez con conocimiento de causa de desheredación, cesa la obligación de alimentos al hijo respecto de los padres, cuando éstos no le hubieren enseñado un oficio, o cuando prostituyen a las hijas”.

El (Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, pág. 722), manifiesta que: “Entre las condiciones y requisitos para que haya lugar a la obligación de dar alimentos, la primera condición es la de que puedan realmente darse a quien está en la pobreza o no tiene la suficiencia para cubrir sus propias necesidades.”

Fueyo expresa que solamente se calcularán las rentas del deudor de alimentos, y solo por excepción el capital, no siendo posible obligar a sacrificar el capital sino en forma prudente y siempre que se trate de alimentarios de gran proximidad, como son el cónyuge y los hijos.

(Cisneros Espinel, 1959, pág. 58), en su obra Derecho Civil Ecuatoriano, expresa que: “Los derechos que corresponden al hijo que está en el vientre materno y que ya hubiere nacido, como su aplicación, corresponden a la legislación civil.

Si la criatura sobrevive después de separada del claustro materno, el tiempo fijado por la ley, hace irrevocablemente suyos los derechos que estaban en suspenso, esperando su nacimiento y aunque fallezca inmediatamente después, por cualquier causa, transmitirá esos derechos a sus herederos. Caso contrario, si no nace viable y sobrevive el tiempo determinado por la ley, nada adquiere y nada puede transmitir. (Larrea Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, págs. 460, 461, 462)

De conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia, los artículos 128 y 129, respectivamente, determinan:

Art. 128.- Titulares de este derecho.- Tienen derecho a reclamar alimentos:

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados.
2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan de recursos; y,

3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismas.

Art. 129.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas mencionadas en el artículo anterior, en su orden:

1. El padre y la madre, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.
2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior;
3. Los abuelos; y,
4. Los tíos.

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el juez regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos. Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo anterior o asumirla en su totalidad, según el caso.

Según el Art. 349 del Código Civil, se deben alimentos a:

1. Al cónyuge,
2. A los hijos
3. A los descendientes,
4. A los padres,
5. A los ascendientes.
6. A los hermanos; y,
7. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiera sido rescindida o revocada.

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se los niegue. En lo que no está previsto en esta ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en otras leyes especiales.

a) HIJO MAYOR DE EDAD

(Larrea Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, pág. 463), sostiene que la obligación de dar alimentos por parte de los padres se suspende cuando el hijo cumple la mayoría de edad. Para Luis Claro Solar, la obligación de los padres cesa y el deber de dar educación termina, cuando el hijo puede dirigir su vida, trabajando por sí mismo para satisfacer sus necesidades.

En cambio la obligación alimenticia no tiene un límite determinado ya que ésta nace con las necesidades y por la falta de medios; consecuentemente tiene derecho a reclamar su cumplimiento, pudiendo durar toda la vida, si el hijo tiene algún impedimento.

A diferencia de la prestación de alimentos, cuya característica es la reciprocidad, el deber de proporcionar educación no es recíproco.

La obligación de los padres de prestar alimentos no cesa porque el hijo cumpla los dieciocho años, especialmente si estuviere estudiando y no tuviere medios para subsistir.

El artículo 360 del Código Civil establece que los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda.

Con todo ningún varón de aquellos a quienes solo se deben alimentos necesarios y no congruos, podrá pedirlos después que haya cumplido dieciocho años, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se

habilitare, revivirá la obligación de alimentarle tomando en consideración de manera especial, la protección que se le debe proporcionar hasta que llegue a ser profesional y pueda vivir independientemente, criterio que comparto ya que una vez obtenido un título o terminado los estudios, está preparado para suplir sus propias necesidades.

El concepto legal de alimentos, considera no solamente, el alimento en sí mismo, sino todo lo que es necesario para el sustento: habitación, vestuario, asistencia médica, educación. Es necesario recalcar que, de acuerdo con el artículo arriba mencionado, los alimentos se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, si continúan las circunstancias que legitimaron la demanda.

Si los alimentarios se hallan en la condición de estudiantes, el hecho de haber cumplido la mayoría de edad no los inhabilita para recibir alimentos. Sin embargo, deben probar que están matriculados y asistiendo normalmente a clases para poder reclamar ese derecho y no distraer el verdadero espíritu de esta institución.

b) MUJER CASADA

Se deben alimentos al cónyuge cuando existe separación judicialmente autorizada o liquidación de la sociedad conyugal.

En 1902 se estableció lo que se denominó divorcio de mera separación de vida marital, conocido como divorcio imperfecto, divorcio semipleno, separación de cuerpos y más adelante, separación conyugal judicialmente autorizada.

La ley civil no se preocupó de legislar sobre los efectos de la separación, de manera especial en lo relacionado con los derechos entre los cónyuges y respecto de los hijos. Tampoco se opinó sobre la capacidad de la mujer ni sobre los alimentos. En 1953, se presenta en el Senado un proyecto de reformas a los Códigos Civil y de Procedimiento Civil que, entre otras cosas, contempla el restablecimiento del antiguo divorcio imperfecto, bajo el nombre de separación conyugal judicialmente autorizada.

Si bien esta modalidad de separación no es muy común en la actualidad, la separación judicialmente autorizada conserva los mismos preceptos y base legal que la que se producía por los años 50, con la salvedad de variación del articulado, en el Código Civil vigente.

De conformidad con lo que establece el Artículo 221 del Código Civil vigente, Efectos de la separación judicialmente autorizada, los cónyuges que mediante sentencia ejecutoriada hubieren obtenido la separación conyugal judicialmente autorizada, conservarán todos los derechos, obligaciones y efectos inherentes a este estado.

Los cónyuges separados podrán, en cualquier tiempo, de mutuo acuerdo, solicitar al juez que declare terminada la separación conyugal; para ello bastará la declaración conjunta de los cónyuges, por escrito, ante el juez competente, quien cerciorándose de la verdad y libertad de la declaración; luego de reconocidas las firmas, pronunciará sentencia, sin más trámite, la misma que se inscribirá en el registro civil y en el de la propiedad del respectivo cantón, tomándose nota de esta sentencia al margen de la que autorizó la separación.

En virtud de la sentencia se restablecerán los derechos y las obligaciones entre los cónyuges y el régimen de la sociedad conyugal, si no lo establecieron las capitulaciones matrimoniales, en concordancia con los artículos 824 al 828 del Código de Procedimiento Civil

También podrán demandar el divorcio en cualquier momento, por mutuo consentimiento o por las causas determinadas en el artículo 110 de este mismo Código.

La separación conyugal, de la misma forma que ocurre con el divorcio, puede producirse en dos modalidades: consensual o contenciosa. Consensual es aquella que se basa en el mutuo consentimiento de los cónyuges en orden a terminar la vida en común.

Al respecto, el artículo 106 del Código Civil se remite al artículo 107 del mismo cuerpo legal, que establece el divorcio por mutuo consentimiento, mediante la solicitud de los cónyuges al juez de lo civil.

Luego de presentada la demanda y después de transcurridos 60 días, de conformidad con el artículo 108 del citado Código, los cónyuges tienen la audiencia de conciliación ante el juez de lo civil para que reiteren o desistan de su intención de separarse. En esta misma audiencia se arregla lo concerniente a la situación económica de los hijos y si hay arreglo, el juez dicta sentencia.

Si no se llega a un acuerdo, el juez da el término probatorio de seis días para que resuelvan sobre la pensión alimenticia y el cuidado de los menores. Luego de concluido este término, dicta sentencia. Los efectos de la separación conyugal judicialmente autorizada se refieren tanto a los cónyuges, como a los hijos y a los bienes.

En cuanto a la situación de los hijos se aplica las reglas del divorcio; es decir, que se deja resuelto su cuidado y situación económica. De lo que se deduce que la intención del legislador al emitir estas normas es que los hijos no queden desprotegidos y tengan lo necesario para su subsistencia, no obstante sea el divorcio perfecto. En consecuencia, los padres deben aportar para cubrir los gastos de educación, alimentos y cuidado de acuerdo a sus posibilidades económicas.

El divorcio imperfecto deja intacto el derecho de recibir alimentos en el estado de indigencia del otro cónyuge, la mujer casada que reclama alimentos debe comprobar que está abandonada del marido o separada de él con justa causa.

Si la mujer es la causante de la separación y así consta en la sentencia, no puede reclamar alimentos; pero, si no es culpable puede reclamarlos y por un sentido de reciprocidad y equidad, también puede reclamarlos el marido si no fue el causante de la separación. El cónyuge separado que carece de lo necesario para su congrua subsistencia tiene derecho a reclamar la quinta parte de los bienes del otro, a menos que haya sido el causante de la separación conyugal.

Ni la ley, tampoco la doctrina se refieren a los alimentos entre los cónyuges cuando se ha dado la separación conyugal por mutuo consentimiento. Algunos autores sostienen que la base de la

obligación alimenticia es el estado de indigencia de la persona que los reclama, no obstante ser el parentesco la causa fundamental.

Cuando se presenta la separación conyugal por mutuo consentimiento, el cónyuge que carece de lo necesario para su subsistencia, puede reclamar al otro basándose en el fundamento mismo de la obligación alimenticia entre cónyuges y que es el socorro mutuo que se origina en el matrimonio, y como la separación conyugal no disuelve el vínculo matrimonial, el fundamento de la obligación subsiste.

En el caso de separación conyugal judicialmente autorizada el vínculo matrimonial se mantiene, según lo manifiesta el artículo 221 del Código Civil que establece que, en cuanto al cuidado personal y situación económica de los hijos comunes se aplicarán las reglas establecidas para el caso del divorcio.

En el caso de los esposos, la obligación de prestarse asistencia es recíproca, pero recae principalmente sobre el marido; por consiguiente, en el juicio de divorcio dicha ayuda está garantizada de manera especial para la mujer, en cuyo caso, el cónyuge inculpable tiene derecho a recibir hasta la quinta parte de los bienes del otro para completar lo necesario para su congrua sustentación.

Esta porción de bienes, aunque se le entrega de una vez por todas, y no a manera de pensión periódica, tiene también un cierto carácter alimenticio. La prestación alimenticia recíproca entre los cónyuges surge del matrimonio, aunque esta institución no establece parentesco entre ellos, pero establece otros lazos creando una comunidad, cimiento de la sociedad, como es la familia.

Nuestro Código Civil en el artículo 134 establece, que los cónyuges están obligados a socorrerse y ayudarse mutuamente, en todas las circunstancias de la vida. El inciso segundo del mismo artículo señala que el marido debe protección a la mujer y ésta obediencia a él.

El artículo 136 del Código arriba mencionado manifiesta, que los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario; de lo que desprende que, los cónyuges están en la obligación de suministrarse alimentos, pese a que la ley no utiliza esta expresión pero, bajo el nombre de socorro, sin lugar a dudas, se establece la obligación alimenticia recíproca entre los cónyuges, quienes están obligados a vivir juntos, así como también, es obligación de marido y mujer el sostenimiento de las cargas familiares.

La obligación de socorro mutuo entre los cónyuges, constituye un principio fundamental que debe ser cumplido y reclamado en el hogar conyugal. Por lo tanto, el cónyuge que por su sola voluntad, abandona el hogar y deja de hacer vida común, no tendrá derecho a reclamar alimentos al otro que no ha dado motivo a esta separación.

La mujer casada que se encuentra en estado de necesidad, podrá demandar alimentos al marido, siempre que pruebe que está abandonada por él o separada con justa causa, o que éste no suministra los alimentos a los que está obligado por ley.

Existe vastísima jurisprudencia y fallos de la Corte Nacional de Justicia, que establecen como principio básico, para que la mujer casada pueda demandar alimentos.

Uno de estos fallos establece, que la mujer casada, además de acreditar su derecho a reclamar alimentos y la cuantía de los bienes del demandado, ha de probar cualquiera de estas tres circunstancias:

- a. Que el marido ha abandonado el domicilio conyugal,
- b. Que se ha separado de él con justa causa
- c. O que éste no suministra los alimentos que son debidos

La facultad del abandonado a reclamar alimentos a su mujer, no está establecida con claridad, pero en virtud de que la prestación alimenticia entre cónyuges es recíproca, el marido, probando

dichas circunstancias puede demandar alimentos a la mujer que ha abandonado el hogar conyugal.

En el caso de que se produzca el divorcio, no sólo se suspende la vida común, sino que, también se disuelve la sociedad conyugal existente entre los cónyuges. Con relación a este punto, (Beltrán Heredia, 1958), manifiesta:

“según nuestro modo de ver esta hipótesis, no puede surgir una obligación alimenticia entre los cónyuges divorciados, aunque algunos de ellos se encuentren en estado de necesidad, ya que al producirse el divorcio, se rompe el vínculo conyugal, con cuyo rompimiento, desaparece el estado de parentesco y con él, el presupuesto necesario para que surja esta obligación”.

En el juicio de divorcio se garantiza que el cónyuge, que no es culpable del divorcio, y carece de lo necesario para su congrua sustentación, tiene derecho a que se le entregue la quinta parte de los bienes del otro y, si tuviere bienes, pero no de tanto valor, como esa quinta parte, solo tendrá derecho al complemento, de conformidad con lo que estipula el artículo 112 del Código Civil.

A criterio de (Larrea Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, pág. 490), esta porción de bienes que se entrega al cónyuge inculpable, a pesar de no ser pensión periódica, tiene un cierto carácter alimenticio.

El artículo 221 del Código Civil expresa que cualquiera de los cónyuges en todo tiempo podrá demandar la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de la misma. En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, aseverando que el artículo 236 del Código Civil no exige que el actor fundamente su demanda de disolución de la sociedad conyugal, por ende, si la ley no lo pide, tampoco el juzgador puede pedirlo al litigante.

Todo lo que se necesita es que uno de los cónyuges lo solicite y eso es causa suficiente. Disolución y liquidación son momentos distintos con consecuencias diversas. Por la primera deja de existir el régimen y por la segunda se distribuyen los gananciales. El artículo 295 establece que una vez disuelta la sociedad conyugal se procederá a la formación de inventario y tasación de los bienes.

c) A LOS HIJOS

La obligación de proporcionar alimentos corresponde al padre y a la madre, en relación a la capacidad económica de cada uno de ellos. Esta obligación comprende la satisfacción de las necesidades de subsistencia. Habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor. A falta o impedimento de los padres, estarán obligados a suministrar alimentos al menor, en su orden, sus ascendientes, sus hermanos y sus tíos.

También la obligación entre padres e hijos y entre ascendientes y descendientes es recíproca, pero solamente cuando los hijos o descendientes han alcanzado la mayoría de edad, ya que durante la minoría, los hijos o descendientes tienen derecho a los alimentos y no están obligados a darlos.

Adicionalmente, los menores por su condición de menores, pueden reclamar alimentos, aunque el juez debe tener en cuenta que si pueden trabajar y ganarse la vida con un trabajo adecuado lo hagan. En caso de padres o abuelos indigentes e incapaces, y de descendientes que pueden ganar con su trabajo, no obstante ser menores, es preciso establecer la obligación de que dichos descendientes pasen alimentos, si no hay otras personas que deben hacerlo en su lugar.

En caso de terminación del matrimonio, de conformidad con lo que prescribe el Art. 108 del Código Civil, a la madre divorciada o separada del marido le corresponde el cuidado de los hijos impúberes sin distinción de sexo y de las hijas de toda edad. En cuanto a los hijos púberes, estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos elijan.

Si los dos padres se hallaren inhabilitados para el cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los padres, correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393 del mencionado Código (padre del menor, madre, los demás ascendientes, los hermanos del pupilo, los hermanos de los ascendientes del pupilo), el juez puede alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo exige.

A falta de estas personas, cuando, a criterio del juez, el o los menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que sean entregados a un establecimiento de asistencia social, pública o privada, o en colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad, con suficiente capacidad económica.

Para el efecto, fijará la pensión que deben pasar por alimentos, para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a solicitud del Ministerio Público o de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si dichas personas carecen de medios económicos para pagar una cuota mensual, el juez deberá manifestarlo en su providencia. El cobro de la pensión se hará por apremio en la forma determinada por el juez.

Con relación al donante que hubiere hecho una donación cuantiosa, la primera dificultad se presenta cuando se trata de apreciar lo que se puede entender por “donación cuantiosa”. No puede constituirse un criterio absoluto, cuando se requiere insinuación judicial, el hecho de que haya una donación cuantiosa, y que no la haya en caso contrario; más bien debería establecerse una relación proporcional entre el patrimonio del donante y del donatario.

2.5. SUJETOS DE LA OBLIGACION DE ALIMENTOS

Según (Wray, García, & Larenas , 1999, pág. 80):

“Existen generalmente dos sujetos: el obligado a dar, hacer o no hacer algo y quien está facultado para exigir; es decir, el sujeto activo de la obligación. En el derecho a la pensión alimenticia el sujeto pasivo de la obligación se denomina alimentante y el beneficiario de la pensión, alimentado.

El Código Civil (Art. 349), establece que se deben alimentos a favor del cónyuge, de los hijos, los descendientes, los padres, los ascendientes, los hermanos y de quien hizo una donación cuantiosa no rescindida o revocada. Además, el Código de la Niñez y la Adolescencia, precisa que el padre y la madre tendrán la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, pero a falta o por impedimento de los padres, deberán prestarlos los abuelos paternos o maternos, los hermanos y los tíos del menor, en ese orden.

Si bien el mencionado Código establece que deberá proveerse de alimentos a los hijos, también encontramos una importante limitación según la cual, ningún varón mayor de dieciocho años podrá demandarlos, salvo que padezca de algún impedimento físico o mental que lo inhabilite para sustentar su propia vida (Art. 360 C.C.).

Es necesario mencionar que este mismo cuerpo legal, establece el principio según el cual, los incapaces para ejercer el derecho de propiedad, no lo son para recibir alimentos (Art. 353 C.C.) En caso de que un menor con derecho reclame alimentos, necesitará de un curador para que lo represente en el juicio.

Cabe mencionar que durante el matrimonio, los alimentos de los hijos gravan a la sociedad conyugal; sin embargo, siendo recíproca la obligación entre padres e hijos, éstos solamente los deben cuando son mayores de edad; mientras no lo sean, tienen derecho a los alimentos, pero no están obligados a darlos.

Respecto de la obligación alimenticia entre personas ligadas por vínculos de adopción, se debe tomar en consideración que en algunas legislaciones existen dos formas de adopción, la plena y la simple.

En caso de adopción plena, se extingue toda obligación alimentaria entre el adoptado y su familia de origen, y nace en la nueva familia, especialmente en el adoptante.

En la adopción simple, el adoptado puede reclamar alimentos al adoptante (pero no a otros miembros de esa familia) y, si no puede obtenerlos de él, subsiste la obligación de los parientes naturales. En Cuba, en forma general, se señala que están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges entre sí, los ascendientes y descendientes, los adoptantes y los adoptados, los hermanos. No obstante, de manera expresa se establece que los hijos menores tienen derecho preferente para reclamarlos de sus padres.

En cambio, los sistemas: argentino, brasileño y uruguayo, admiten una obligación alimentaria recíproca sin limitación de grados entre ascendientes y descendientes legítimos. En Argentina, si son legítimos limita la obligación en grados a los abuelos y nietos.

El Código Civil Uruguayo, limita la obligación a los padres e hijos naturales, pero el Código del Niño amplía el régimen disponiendo que a falta de los padres, la obligación de alimentos se extiende a los descendientes del menor, sean legítimos o naturales. El Código Brasileño, respecto de los alimentos, no distingue entre hijos legítimos y naturales.

(Orbe, 1995, pág. 203), en su obra Derecho de Menores, manifiesta que:

“La obligación recae en el padre y la madre del menor Responsabilidad compartida; no unilateral del uno o el otro progenitor. Es de los dos y como dispone el Art. 262 del Código Civil es de “consuno”; es decir, en igualdad de obligación, sobre todo, cuando están separados con ruptura de sus relaciones matrimoniales o extramatrimoniales, como es el caso de la unión de hecho”.

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, establece:

Obligados y Beneficiarios, la obligación de darse alimentos que es recíproca, se refiere a estas personas: 1. Los cónyuges, 2. Los ascendientes y descendientes legítimos, 3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legítimos de éstos, 4. Los padres y los hijos naturales reconocidos y los descendientes legítimos de éstos. Los padres y los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición

legal de naturales se deben, por razón de alimentos, los auxilios necesarios para la subsistencia.

Además los padres están obligados a costear a los hijos la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio. Los hermanos deben también a sus hermanos legítimos, aunque solo sean consanguíneos o uterinos, los auxilios necesarios para la vida cuando por un defecto físico o moral o por cualquiera otra causa que no resulte imputable al alimentista, no pueda este procurarse su subsistencia.

Algunos ordenamientos jurídicos, contemplan la obligación alimenticia y el recíproco derecho se extiende a suegro o suegra y a yerno y nuera; de ser dos o más los obligados a prestarlos, la obligación se establece legalmente, así:

- a.-** El cónyuge;
- b.-** El descendiente de grado más próximo;
- c.-** El ascendiente más inmediato;
- d.-** Los hermanos. De corresponder a varios, la deuda alimenticia se distribuye en proporción al caudal de cada uno.

Como podemos apreciar, existe una coincidencia de criterios entre los diferentes autores, ya que la obligación de dar alimentos a los hijos corresponde en primer lugar a los padres, en segundo lugar a los hermanos, en tercer lugar, a los abuelos y en cuarto lugar, a los tíos. En la práctica, la obligación primordial es del padre y la madre, y a falta de ellos, la responsabilidad recae en los parientes de acuerdo al orden establecido en el Art. 129 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

(Orbe, 1995, pág. 205), en su libro Derecho de Menores, dice que la obligación de los parientes progenitores empieza

Cuando los padres no existen, o, éstos se encuentran impedidos, como cuando carecen de ingresos por falta de una fuente de trabajo, o, por estado de enfermedad permanente como el demente o el ebrio consuetudinario, esta obligación recae en otros familiares cercanos. Primero, los abuelos paternos, luego los abuelos maternos; después, los hermanos y aún los tíos del menor.

CAPITULO III

3.1. COMPETENCIA

Competencia es la facultad que tiene el juez para administrar justicia dentro de los límites de su jurisdicción. Entre jurisdicción y competencia existe la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Jurisdicción es el poder de juzgar. En cambio, Competencia es la medida de la jurisdicción que la ley confiere a cada juez o tribunal.

De conformidad con lo que expresa el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil, competencia es la medida dentro de la cual la potestad de administrar justicia, está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de las cosas, de las personas y de los grados.

Para el tratadista Osorio, (Osorio, 1982, pág. 58), Competencia es la atribución legítima de un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Couture la define como medida de jurisdicción asignada a un órgano del poder judicial a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar. Los problemas de competencia tienen lugar cuando dos jueces creen que les compete conocer un asunto determinado.

La competencia en el ejercicio de la jurisdicción privativa, se prorroga sólo en asuntos y sobre personas que están sometidas a esa jurisdicción, aunque el juez propio sea de diverso territorio. La competencia no se prorroga por razón de los grados”.

Según el Art. 15 del mismo Código, en las causas civiles tiene lugar la prevención por la citación de la demanda al demandado, en la forma legal, o por sorteo.

De conformidad con lo que dispone el artículo 21 del CPC, la competencia se suspende respecto a la causa sobre que se ejerce:

1. En los casos de excusa y de recusación. En el primero, desde que la excusa consta de autos hasta que se ejecutoria la providencia que declare sin lugar el impedimento; y en el segundo, desde que se cite al juez recusado el decreto en que se le pida informe, hasta que se ejecutorie la providencia que deniegue la recusación;

Por el recurso de apelación, o de hecho, desde que, por la concesión del recurso, se envíe el proceso al superior hasta que se le devuelva, siempre que la concesión del recurso sea en los efectos suspensiva y devolutiva.

2. Cuando se promueve juicio de competencia desde que el juez recibe el oficio inhibitorio hasta que aquella se dirime, salvo si se hubiese realizado alguno de los casos previstos en el Art. 12; pues, en tal evento, continuará interviniendo el juez requerido y se limitará a enviar copia de la causa de que está conociendo a costa del promotor.

El juez pierde la competencia, según lo estipula el artículo 22 del mismo Código, en los siguientes casos:

1. En la causa para la cual ha sido declarado incompetente por sentencia o auto ejecutoriado;
2. En la causa en que se ha admitido la excusa o la recusación; y,
3. En la causa fenecida cuando está ejecutada a sentencia, en todas sus partes.

Cuando una persona ha sido demandada ante juez de distinto fuero y, de conformidad con lo que dispone el Art. 26 del citado Código, puede declinar la competencia o acudir a su juez propio para que la entable, o prorrogar la competencia en el modo y casos en que puede hacerlo conforme a la Ley.

El artículo 27 del mismo Código expresa que el juez del lugar donde tiene su domicilio el demandado, es el competente para conocer de las causas que contra éste se promuevan. El que no tiene domicilio fijo puede ser demandado donde se lo encuentre, Art. 28 CPC.

De acuerdo a lo que dispone el Art. 28, el que tiene domicilio en dos o más lugares puede ser demandado en cualquiera de ellos. Pero si se trata de cosas que dicen relación especial a uno de dichos domicilios exclusivamente, sólo el juez de éste es competente para tales casos.

Es también competente, en la parte pertinente, además del juez del domicilio:

1. El del lugar en que deba hacerse el pago o cumplirse la obligación;

Para la Legislación Chilena, Competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.

La Legislación Argentina acoge el principio de que dentro del juicio sumario de alimentos, es competente el juez del domicilio del demandado. La obligación de prestar alimentos está consignada en el Código Civil; en consecuencia, los titulares de este derecho pueden deducir su acción, en la forma que para cada caso, indica la ley.

Las acciones de alimentos entre cónyuges e hijos mayores de edad deben deducirse, necesariamente, ante la justicia ordinaria adjuntando la partida correspondiente. Consecuentemente, es el juez civil el que debe estos casos, ya que es el competente por tener la potestad pública de juzgar, potestad que está distribuida entre jueces y tribunales por razón de cosas, territorio, personas y grados.

De conformidad con lo que expresa el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil, competencia es la medida dentro de la cual la potestad de administrar justicia, está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de las cosas, de las personas y de los grados.

El artículo 6 del referido Código dice:

La competencia de los jueces que ejercen jurisdicción ordinaria es prorrogable, en conformidad con las disposiciones. La competencia en el ejercicio de la jurisdicción privativa, se prorroga sólo en asuntos y sobre personas que están sometidas a esa jurisdicción, aunque el juez propio sea de diverso territorio. La competencia no se prorroga por razón de los grados.

El juez pierde la competencia, según lo estipula el artículo 22 del mismo Código, en los siguientes casos:

1. En la causa para la cual ha sido declarado incompetente por sentencia o auto ejecutoriado;
2. En la causa en que se ha admitido la excusa o la recusación;
3. En la causa fenecida cuando está ejecutada a sentencia, en todas sus partes.

Según lo prescribe el artículo 25 del CPC: toda persona tiene derecho para no ser demandada sino ante el juez de su fuero.

Cuando una persona ha sido demandada ante juez de distinto fuero y, de conformidad con lo que dispone el Art. 26 del citado Código, puede declinar la competencia o acudir a su juez propio para que la entable, o prorrogar la competencia en el modo y casos en que puede hacerlo conforme a la Ley.

El artículo 27 del mismo Código expresa que el juez del lugar donde tiene su domicilio el demandado, es el competente para conocer de las causas que contra éste se promuevan. El que no tiene domicilio fijo puede ser demandado donde se lo encuentre, Art. 28 CPC.

De acuerdo a lo que dispone el Art. 28, el que tiene domicilio en dos o más lugares puede ser demandado en cualquiera de ellos. Pero si se trata de cosas que dicen relación especial a uno de dichos domicilios exclusivamente, sólo el juez de éste es competente para tales casos.

Es también competente, en la parte pertinente, además del juez del domicilio:

2. El del lugar en que deba hacerse el pago o cumplirse la obligación;

3.2. DEL JUICIO DE COMPETENCIA

El Código de Procedimiento Civil, en los artículos 863 al 870, dispone todo lo relacionado con el juicio de competencia: *“El juez o tribunal que pretenda la inhibición de otro juez o tribunal, para conocer de una causa, le pasará oficio en que, expuestas las razones en que se funde, anuncie la competencia si no cede”*. Art. 863

Art. 864.- El juez o tribunal requerido acusará inmediatamente recibo, y en el término de tres días, contados desde que recibió el oficio, contestará cediendo o contradiciendo. En este segundo caso, deberá exponer las razones en que se funde y aceptar la competencia.

Con esta contestación, se dará por preparada y suficientemente instruida la competencia; y, sin permitirse otra actuación, se remitirán, salvo el caso del número 3 del Art. 21 de este mismo Código, al superior a quien corresponda dirimir la competencia, las actuaciones originales que hubieren formado, respectivamente, los dos jueces. Art. 865 CPC.

Recibidas las actuaciones en el juzgado o tribunal, se fallará la causa dentro de los seis días siguientes. Si hubiere hechos justificables, se recibirá la causa a prueba, por cuatro días. Art. 866 CPC.

Art. 867. En los juicios de competencia, caso de ser ésta denegada por el superior, se condenará al juez provocante y a la parte que hubiese pedido la competencia al pago de costas y

perjuicios, y al de una multa de doscientos a dos mil sucres al juez provocante, y de cuatrocientos a cuatro mil sucres a la mencionada parte.

Las indemnizaciones y multas serán de cargo del juez, si éste hubiese provocado de oficio la competencia, y de cargo de la parte provocante, en caso contrario, Art. 868 CPC.

Art. 869. La resolución que recaiga se pondrá en conocimiento del fiscal, y se comunicará inmediatamente, de oficio, a los tribunales y juzgados correspondientes. No se concederá de ella ningún recurso.

También habrá lugar a este juicio cuando un juez o tribunal a quién se sometiere una causa, por haberse declarado otro incompetente, resolviera así mismo no ser el asunto de su competencia sino de la del primero, Art. 870 CPC.

En este caso, el juez o tribunal que dio la última declaración, a petición de parte oficiará al anterior, para que, sin pérdida de tiempo, eleve al superior sus actuaciones originales, y elevará del mismo modo las propias para los efectos del Art. 865 del CPC.

(Tamés Peña, pág. 204), en su obra Los Derechos del Niño. Un Compendio de Instrumentos Internacionales, textualmente dice:

“Artículo 8.- Serán competentes en esta esfera internacional para conocer de reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor:

- a) El Juez o autoridad del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor;*
- b) El Juez o autoridad del estado del domicilio o de las residencia habitual del deudor, o*

- c) *El Juez o autoridad del estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, se consideran igualmente competentes, las autoridades judiciales o administrativas de otros estados a condición de que el demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la competencia”.

Art. 9.- Serán competentes para conocer las acciones de aumento de alimentos, cualesquiera de las autoridades señaladas en el Art. 8. Serán competentes para conocer de las acciones de cese y reducción de alimentos, las autoridades que hubieren conocido de la fijación de los mismos.

Art. 10.- Los alimentos deber ser proporcionales, tanto a la necesidad del alimentario, como a la capacidad económica del alimentante.

Si el Juez o autoridad responsable del aseguramiento o ejecución de la sentencia adoptara medidas provisionales, o dispone la ejecución por un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor.

En el diario Los Andes, de la ciudad de Riobamba, en su edición de mes de Febrero de 2007, se determina el procedimiento legal para poder reclamar alimentos y dice: “Requisitos para presentar una demanda:

- Partida de nacimiento del menor; y,
- Copia de la cédula y el certificado de votación de la madre, en el caso que viva con ella.

3.3. JUECES DE LO CIVIL Y JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Con la expedición del Código de la Niñez y la Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 737, el 3 de Enero del 2003 se derogó el antiguo Código de Menores.

a.- JURISDICCION CIVIL

Los trámites para pedir alimentos, tanto en la jurisdicción civil, como en los Juzgados de Menores, son distintos; diferencia que está dada por su propia naturaleza.

Nuestra Legislación determina el procedimiento a seguir para demandar alimentos. Uno es el previsto en el Código de Procedimiento Civil; y, el otro, está dado por el Código de la Niñez y la Adolescencia.

En el procedimiento legal para reclamar alimentos, el Código Civil vigente, determina la fijación de alimentos a favor de los menores, como paso previo al proceso de terminación del matrimonio mediante divorcio por una de las causales que el mismo Código señala.

Toda reclamación de alimentos se inicia con una demanda, la misma que de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, es el acto en el que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo.

La demanda deberá reunir los requisitos contemplados en los artículos 71 y 72 del Código de Procedimiento Civil, los cuales textualmente expresan:

Art. 71.- La demanda debe ser clara y contendrá:

1.- Designación del Juez ante quien se la propone;

- 2.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los nombres completos del demandado;
- 3.- Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión;
- 4.- La cosa, cantidad o hecho que se exige;
- 5.- La determinación de la cuantía;
- 6.- La especificación del trámite que debe darse a la causa;
- 7.- La designación del lugar en el que debe citarse al demandado y la del lugar donde notificarse al actor; y,
- 8.- Los demás requisitos que la Ley exige para cada caso.

Art. 72.- A la demanda se debe acompañar:

- 1.- El poder para intervenir en el juicio cuando se actúe por medio de apoderado,
- 2.- La prueba de representación del actor si se tratare de persona natural incapaz;
- 3.- La prueba de representación de la persona jurídica, si ésta figurare como actora;
- 4.- Los documentos y las pruebas de carácter preparatorios que se pretendieren hacer valer en el juicio y que se encontraren en poder del actor; y,
- 5.- Los demás documentos exigidos por la Ley para cada caso.

Propuesta la demanda ante el juez civil correspondiente, éste avoca conocimiento de la acción, previo al sorteo respectivo, estableciéndose de esta manera la competencia, para que el juez inicie con el trámite de la demanda.

El Juez que está en conocimiento de la causa, tiene la obligación de determinar, no solamente la tenencia de los menores, sino que también, debe fijar la pensión alimenticia que corresponde a dichos menores.

b.- JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

La demanda se la presenta ante la Oficina de Sorteos y Casillero Judicial, con ocho copias y la correspondiente partida de nacimiento del alimentado. La causa es sorteada en ese mismo momento y se la remite a uno de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia. Para este tipo de juicio no se cancela ninguna tasa judicial.

Al Juez de la Niñez y la Adolescencia que por sorteo le corresponde el conocimiento de la causa, avoca conocimiento de la misma en la primera providencia.

Si la demanda reúne los requisitos de ley, la acepta a trámite y la califica dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la misma; caso contrario, ordenará completarla en el término de tres días, de conformidad con lo que dispone el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil.

En la misma providencia, se dispondrá que se cite a la parte demandada con la providencia y este decreto le previene que en caso de no señalar domicilio judicial, el trámite se sustanciará en rebeldía.

Los artículos 1, 2 y 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia, determinan:

Artículo 1.-

“Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y la adolescencia y a la doctrina de protección integral”.

Artículo 2.- “Sujetos Protegidos”.- *Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este Código”.*

Artículo 3.- “Supletoriedad”.- *En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y la adolescencia”.*

El procedimiento contencioso general creado por el legislador en el Código de la Niñez y la Adolescencia, es expedito y permite cumplir con los principios de celeridad, eficiencia, contradicción, oralidad y del debido proceso garantizados por la Constitución Política de la República del Ecuador y debería, también, incorporarse en el proyecto del Código de Procedimiento Civil, medida que, de ponerse en práctica, evitaría largos y tediosos incidentes procesales que dilatan los procesos.

Esta fórmula procesal, incorpora instituciones jurídicas dignas de ser resaltadas, tales como: el procedimiento exclusivamente oral, la presencia directa y personal del Juez en las audiencias; la consulta obligada que siempre debe obtenerse del adolescente y del niño o niña cuando esté en condiciones de prestarlo; la formulación del interrogatorio directo a los testigos, peritos, intérpretes y contraparte sin necesidad de intermediación del Juez; el anuncio de prueba; la concesión del recurso de apelación sólo en el efecto devolutivo.

3.4. PROCEDIMIENTO

El procedimiento contencioso general se aplica, de conformidad con lo que dispone el Art. 271 del Código de la Niñez y la Adolescencia para la sustanciación de todos los asuntos

relacionados con las materias que trata el Libro Segundo; las del Libro Tercero, cuya resolución es de competencia privativa del Juez de la Niñez y la Adolescencia.

En asuntos de limitación, suspensión, privación y restitución de la patria potestad, tenencia (con ligeras variantes contenidas en los artículos 290 y 291 del CNAdo) regulación del régimen de visitas, de prestación alimenticia a favor de niños, niñas y adolescentes, de prestación alimenticia para la mujer embarazada (en los asuntos de fijación de alimentos, tenencia y patria potestad, se observarán, además, las normas especiales contenidas en los Arts. 292 y 293 del citado Código), de las medidas judiciales y administrativas de protección, la acción judicial de protección.

En los casos de adopción nacional e internacional, el procedimiento a seguir está contemplado en los artículos 284 y siguientes del Libro Segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia.

CITACIÓN AL DEMANDADO

Para la citación al demandado se aplicará las reglas contenidas en los artículos 77 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; es decir: Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se le citará por boleta dejada en la correspondiente habitación, a cualquier individuo de su familia o de servicio.

La boleta expresará el contenido del pedimento, la orden o proveído del Juez, la fecha en que se hace la citación; y si no hubiere a quien entregarla, se la fijará en la puerta de la referida habitación y el actuario o citador, sentará la diligencia correspondiente.

La persona que reciba la boleta suscribirá la diligencia y si ella, por cualquier motivo, no lo hiciere, el funcionario respectivo sentará la razón del caso, y la suscribirá. La citación a un comerciante o al representante de una compañía de comercio, podrá también hacerse en el respectivo establecimiento de comercio, en horas hábiles y siempre que estuviere abierto.

Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por boleta que se entregará a cualquiera de sus auxiliares o dependientes. Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el Art. 80

El actuario o citador tendrá la obligación de cerciorarse de la verdad de que se trata de la respectiva habitación, o establecimiento de comercio, para hacer allí la citación en forma legal.

DISPOSICIÓN QUE SE ACLARE O COMPLETE LA DEMANDA

Cuando el actor ha presentado la demanda y el Juez la ha devuelto para que la complete o aclare en el término de tres días; si no lo hiciere, el Juez se abstendrá de tramitarla, de cuya resolución podrá apelar sólo el actor.

La decisión de segunda instancia causará ejecutoria. El Juez, cuando se abstenga de tramitar la demanda, ordenará la devolución de los documentos acompañados a ella, sin necesidad de dejar copia.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La parte demanda, de conformidad con el Art. 106 del Código de Procedimiento Civil, contestará la demanda, como se transcribe a continuación:

1.- Nombres completos, estado civil, edad y profesión del demandado, comparezca por sí o por medio de representante legal o apoderado y la designación del lugar en donde ha de recibir las notificaciones;

2.- Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los documentos que acompañan a la demanda, con indicación categórica de lo que admite y de lo que niega; y,

3.- Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del actor.

La contestación a la demanda se acompañará de las pruebas instrumentales que disponga el demandado, y las que acrediten su representación, si fuere del caso.

El Juez cuidará de que la contestación sea clara y las excepciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, y los requisitos señalados en los ordinales de este artículo, y, de encontrar que no se los ha cumplido, ordenará que se aclare o complete. Esta disposición no será susceptible de recurso alguno.

Iniciado el trámite, la parte actora podrá solicitar la audiencia de conciliación de la causa presentada.

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN

El Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 273 estipula que: *“La Audiencia de Conciliación será conducida personalmente por el juez, quien la iniciará promoviendo en las partes un arreglo conciliatorio que, de haberlo, será aprobado en la misma audiencia y pondrá término al juzgamiento.*

Si no se produce conciliación, el juez escuchará de inmediato las réplicas y contra réplicas de las partes, comenzando por el de contestación del demandado, quien, luego del alegato del accionante, tendrá la oportunidad de hacer una breve réplica. Concluidos los alegatos, oírá reservadamente la opinión del adolescente, necesariamente, o del niño o niña que esté en edad y condiciones de prestarlo.

Antes de cerrar la audiencia, el juez insistirá en una conciliación de las partes; si no la hay y existen hechos que deban probarse, convocará a la audiencia de prueba que deberá realizarse no antes de quince ni después de veinte días contados desde la fecha del señalamiento.

De igual manera, de acuerdo con el Art. 274 del mismo Código, Resolución provisional.- En los juicios sobre patria potestad, prestación de alimentos y régimen de visitas, el juez fijará provisionalmente una pensión alimenticia a favor del menor, en la misma audiencia de que trata el artículo anterior.

Si existe acuerdo de los progenitores al respecto, se pondrá término al juzgamiento. Esta fijación podrá modificarse en la forma señalada en el artículo 278.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR DENTRO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN

En los juicios sobre patria potestad, (limitación, suspensión y privación) prestación de alimentos (de niños, niñas o adolescentes y de mujeres embarazadas) y régimen de visitas, el juez, necesariamente, hará una fijación provisional sobre la prestación del accionante, en la misma audiencia de que trata el artículo anterior.

Si existe acuerdo de los progenitores al respecto, se pondrá término al juzgamiento. Esta fijación podrá modificarse en la forma señalada en el artículo 278 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

IMPUGNACIÓN A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL

La resolución provisional sobre la pretensión del actor en casos de prestaciones alimenticias a favor de niños, niñas o adolescentes y de mujeres embarazadas dictada por el Juez de la Niñez y la Adolescencia, es susceptible de apelación. El Art. 137 del mencionado Código manifiesta:

“En la Audiencia de Contestación y Conciliación del juicio correspondiente, el Juez deberá fijar una pensión provisional de alimentos, teniendo en cuenta el acuerdo de las partes, y, si no lo hubiere, en mérito del proceso. De la resolución

que la fije podrá apelarse sólo en el efecto devolutivo, salvo que se limite a aprobar el acuerdo de las partes, en cuyo caso será inapelable”.

Sobre la prestación alimenticia a favor de la mujer embarazada, el artículo 150 del CNAdo dice:

“en lo que respecta al orden de los obligados, criterios y formas de fijación de esta prestación, apremios, medidas cautelares, subsidios, competencia, procedimiento y más compatibles con la naturaleza de ese derecho, se aplicarán a favor de la madre embarazada las normas sobre el derecho de alimentos a favor del hijo o hija”.

AUTORIDAD QUE PRESIDE LA AUDIENCIA DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El Juez ahora ya no puede delegar al ayudante judicial para que reciba la presida la audiencia de conciliación y contestación a la demanda.

El legislador manifiesta que ésta será conducida personalmente por el Juez. Al respecto, (Albán Escobar, págs. 163, 164), opina que: *“también está facultado para establecer una fórmula de arreglo sin que signifique prevaricar o adelantar criterio, pues debe aplicar el artículo 56 de la Ley de Mediación que prescribe:*

“Los jueces ordinarios no podrán ser acusados de prevaricato, recusados, ni sujetos a queja por haber propuesto fórmulas de arreglo entre las partes en las audiencias o juntas de conciliación”; por lo tanto, no debe tener ningún temor en conciliar a través de un proyecto personal a priori que procure la conciliación de los litigantes, merced al principio de humanidad e interés superior del niño, niña o adolescente.

Propuesta la conciliación, expuesta la fórmula de arreglo, si no se obtiene respuesta favorable, el Juez escuchará las réplicas y contra réplicas de las partes.

Sobre la réplica, Cabanellas en el Diccionario de Derecho Usual, expresa:

“Réplica es la contestación, un argumento en contra, refutación, objeción, reparo, escrito en el que el actor, luego de conocida la contestación que a la demanda haya dado el demandado, reitera sus pretensiones, impugna las defensas del adversario y la reconvención, en su caso.

La réplica (excepción contra la excepción, contestación a la contestación de la demanda, o segunda demanda), cuenta con pocos defensores, ya significa una demora en el trámite del juicio, completamente innecesaria, pues para contestar al adversario se cuenta con la vista con que se cierra el juicio”.

En lo concerniente a la contra réplica:

“El escrito que presenta el demandado al reo para rebatir lo alegado por el actor en la réplica, aduciendo nuevas razones o reforzando las ya expuestas en la contestación a la demanda, también se denomina duplica”.

De acuerdo con el debido proceso, primero se escucha la contra réplica, porque el demandado contesta la demanda, a continuación viene la réplica del actor y, por último, una pequeña réplica del demandado.

Una vez concluidos los alegatos, el Juez tiene la obligación de escuchar la opinión del adolescente, niño o niña cuando está en condiciones de prestarla.

La omisión o incumplimiento de este precepto, trae como consecuencia multa al Juzgador, de conformidad con lo establecido por el numeral 5 del artículo 253 del Código de la Niñez y la Adolescencia que establece:

Los Ministros Jueces, miembros de los concejos cantonales de la Niñez y Adolescencia y de las juntas de Protección de Derechos y de los Municipios, los jueces y funcionarios públicos, que se nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en condiciones de expresar su opinión, en aquellos asuntos que son de su interés.

3.5. PRUEBA

La prueba es la presentación de los medios probatorios antes de la audiencia de prueba con el objeto de que el demandado tenga la oportunidad de prepararla.

Esta es presentada inmediatamente después de que el Juez fija día y hora para que la audiencia de prueba se lleve a cabo. Si es presentada a destiempo o dentro de la audiencia de prueba, no procede y el juez debe rechazarla.

Si el litigante justifica los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda o las excepciones deducidas mediante prueba testimonial, debe indicar en el petitorio de anuncio de prueba, los nombres, apellidos, profesión u ocupación, dirección domiciliaria, así como lo que van a declarar los testigos.

Si presenta prueba documental debe adjuntar los documentos públicos o privados referentes al caso; así como también las pericias y el objeto de las mismas, etc. El Art. 358 del Código de la Niñez y la Adolescencia tratan lo relacionado con la prueba dentro del proceso contencioso, y da cumplimiento, dentro del juicio, al principio constitucional de oralidad, celeridad, eficacia y contradicción.

El Art. 275 del antes mencionado Código determina que: En la audiencia de prueba, tanto autor como demandado, en ese orden, presenten los medios probatorios oportunamente enunciados, empezando con el examen a los quienes pueden ser interrogados por los defensores de las dos partes; los informes de los técnicos deben responder a las observaciones y solicitudes de aclaración que ellos formulen.

Por secretaría del juzgado se da lectura resumida de los documentos que adjunten las partes y de los oficios e informes que se reciban.

Los Abogados defensores interrogarán directamente a los testigos, peritos y contraparte, sin necesidad de la intervención del juez, quien sólo podrá objetar de oficio o a petición de parte, las preguntas formuladas contraviniendo normas constitucionales, contra la ley, irrespetuosas o impertinentes.

AUDIENCIA DE PRUEBA

Conforme a lo que dispone el artículo 275 del Código de la Niñez y la Adolescencia:

“En la audiencia de prueba, actor y demandado, en el mismo orden, presentarán los medios probatorios que hubieren sido oportunamente anunciados, comenzando con el examen de los testigos, que podrán ser interrogados por los defensores de ambas partes, y los informes de los técnicos, que deberán responder a las observaciones y solicitudes de aclaración o ampliación que aquellos les formulen.

Por secretaría del juzgado se dará lectura resumida de los documentos que agreguen las partes y de los oficios e informes que se han recibido.

Los interrogatorios de los abogados defensores se harán directamente a los testigos, peritos y contraparte, sin necesidad de intermediación del juez, que sólo

podrá objetar, de oficio o a petición de parte, las preguntas que considere inconstitucionales, ilegales, irrespetuosas o impertinentes respecto del enjuiciamiento.

Concluida la prueba, los defensores, comenzando por el del actor, podrán exponer sus alegatos sobre la prueba rendida”.

AUTO RESOLUTORIO

Según lo establece el artículo 277 del referido Código, el juez pronunciará auto resolutorio dentro de los cinco días siguientes a la audiencia.

RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 279 del CNYA, manifiesta que: *“La parte que no esté conforme con el auto resolutorio, podrá apelararlo ante el superior, dentro de término de tres días de notificado.*

El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el recurso y sin este requisito la instancia superior le tendrá por no interpuesto. En todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo. El juez inferior remitirá el expediente al superior dentro del término de cinco días siguientes a la concesión del recurso.

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El CNYA establece en su artículo 282 lo siguiente:

“El procedimiento al que se refiere la presente Sección no podrá durar más de cincuenta días de término contados desde la citación con la demanda en primera instancia; ni más de veinticinco días desde la recepción del proceso, tanto en segunda instancia como en el caso de casación.

En caso de incumplimiento de estos términos, el Consejo Nacional de la Judicatura sancionará al juez y a cada uno de los Ministros jueces de la Sala correspondiente, con multa de veinte dólares por cada día hábil o fracción de día de retraso, en caso de reincidencia el Consejo Nacional de la Judicatura aplicará las sanciones que correspondan”.

3.6. AUTO DEL JUICIO CIVIL

Juzgado Primero de lo Civil.- VISTOS: C E F, en calidad de madre y representante legal del menor M P A F, demandando alimentos al padre de dicho menor M C A, manifiesta que en la actualidad M P A tiene 10 años y cursa el tercer año de educación básica, por lo que no puede ser atendido con la mensualidad que voluntariamente ha venido pasando le demandado de 100 dólares, y sobre todo, por la irregularidad de tales entregas, que vistas las posibilidades económicas del demandado quien presta sus servicios en la compañía petrolera YPF, por lo que sus ingresos económicos sobrepasan los dos mil dólares mensuales, solicito que se fije la pensión alimenticia en una cantidad no menor a los 500 dólares. Citado el demandado y receptada la prueba presentada, para resolver se considera: 1.- Con el documento de fojas se ha acreditado la existencia del menor M P A F, hijo de M C A y de C E F y, por tanto, el derecho que tiene a recibir alimentos de su padre de conformidad con el artículo 367 del Código Civil. 2.- A fojas 14 y 15 constan los documentos enviados por la petrolera YPF en los que se informa sobre los ingresos y los descuentos percibidos por M C A, en su calidad de trabajador de esa compañía; como remuneración percibe 2.500 dólares y por descuentos se indica la cantidad de 950 cientos dólares, pero en los que cuentan descuentos por préstamo quirografario, cuenta personal anticipo, cooperativa que no pueden incidir para que se desatienda en suministrar alimentos para su hijo. Además consta que percibe otros ingresos en la empresa por sobre tiempos, prima de campo, etc. utilidades, además de los de ley. 3.- El demandado ha presentado la partida de matrimonio con L V M y las de nacimiento de sus hijos E C M y P D M, más no ha justificado que dichas cargas familiares están bajo su responsabilidad económica. 4.- No consta de autos que la demandante tenga ingresos económicos propios. Por las consideraciones

expuestas, teniendo en cuenta que el demandado tiene facultades económicas suficientes para atender en una pensión alimenticia a favor de su hijo, se ordena que el demandado M C A, pague a favor del menor M P A, la cantidad de 600 dólares mensuales, en concepto de pensión alimenticia provisional por mesadas anticipadas y a partir de la citación con la presente demanda.- Notifíquese.

Las providencias dictadas dentro de los juicios de alimentos no causan ejecutoria así lo dispone el Art. 741 del Código de Procedimiento Civil *“las resoluciones que se pronuncian sobre alimentos no causan ejecutoria”*; es decir, no tienen la característica de finales y definitivas, requisito fundamental para la procedencia del recurso extraordinario de casación; además, según las últimas reformas a la ley de la materia, se limitó este recurso para los “procesos de conocimiento” y de ello se sigue que no procede dicho recurso en los procesos que no son de conocimiento, como en este caso que se trata simplemente de un trámite especial en orden a fijar una pensión alimenticia. Por tanto, sin ser necesaria otra consideración se niega el recurso de casación interpuesto por la recurrente. Sin costas. Ni multa. Notifíquese. F). Drs. Estuardo Hurtado Larrea.- Rodrigo Varea Avilés.- Armando Bermeo Castillo.

3.7. AUTO DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

JUZGADO TERCERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO

Quito, a 30 de mayo de 2008.- a las 10H00.- VISTOS.- A fojas 4 del proceso signado con el No. 670/2007, comparece MILTON EMILIO PATIÑO CÓRDOVA, soltero, de 18 años de edad, de profesión estudiante quien manifiesta que desde hace más de un mes, su padre no ha cancelado la pensión para su manutención y que tampoco le ha ayudado con los gastos de su ingreso a la universidad, a pesar de que tiene grado de Mayor de la Policía y que sus ingresos son más de 500 dólares, por lo que demanda a su padre el Mayor de Policía MILTON ALBERTO PATIÑO, alimentos en la cantidad de Doscientos dólares mensuales. Calificada la demanda con fecha 15 de abril de 2007, conforme consta a fojas 8 vuelta de los autos, se ha procedido a citar en legal forma al demandado.- La audiencia de conciliación y de contestación, se llevó a cabo el 15 de julio de dos mil siete, con la comparecencia del Dr. Esteban José Santos Castro, en representación del actor y por otra parte, el demandado acompañado de su abogado defensor, Dr. Antonio Terán.- La Audiencia de Prueba, fojas 56 y 57, se realizó el 18 de octubre de dos mil siete, con la comparecencia del Dr. Felipe Arboleda, en representación del demandado.-

Concluido el proceso legal siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera lo siguiente: PRIMERO.- De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, este Juzgado es competente para conocer y resolver la demanda planteada por el actor. SEGUNDO.- En la presente causa se ha cumplido con las solemnidades sustanciales determinadas en el Art. 355 del Código de Procedimiento Civil, sin que se observe en su tramitación, omisión alguna, por lo que se declara su validez procesal. TERCERO.- Con la partida de nacimiento del adolescente MILTON EMILIO PATIÑO CÓRDOVA, fojas 1, se determina que es hijo común de la señora Delia María Córdova y del demandado y que a la fecha de presentación de la demanda, contaba, con dieciocho años de edad. CUARTO.- Durante la audiencia de conciliación y contestación, fojas 15 y 16, el demandado manifiesta que siempre se ha preocupado de la manutención de su hijo y de su hogar, que actualmente, por estar jubilado, los ingresos que percibe son mínimos y manifiesta que presentará testigos, contrato de arrendamiento, certificados y roles de pago líquido que percibe del ISPOL; expresa que su ingreso promedio mensual es de tres cientos cuarenta dólares y, ofrece noventa dólares como pensión alimenticia.- El actor se ratifica y afirma en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda y manifiesta que la cantidad requerida como pensión alimenticia en su demanda es para cubrir gastos de educación y que, de acuerdo con la documentación adjunta al proceso, demuestra que se encuentra estudiando en el primer trimestre de ingeniería química en la Universidad Internacional del Ecuador, donde debe cancelar una pensión semestral con préstamo del IECE, la cantidad de mil tres cientos cincuenta dólares, sin contabilizar gastos ocasionales y los demás gastos y, que no acepta el ofrecimiento del demandado.- El Juzgado, en vista de la falta de acuerdo entre las partes, con basado en los artículos 273 y 274 del Código de la Niñez y Adolescencia, fija provisionalmente, la pensión alimenticia en la cantidad de ciento veinte dólares mensuales para el alimentario y convoca a la correspondiente Audiencia de Prueba. QUINTO.- En la Audiencia de Prueba, fojas 54 y 55, el actor solicita se recepte la confesión judicial del demandado, quien declara conocer al señor Marcelo Javier Vinueza Andrade, porque es un familiar materno, pero que no es verdad lo del préstamo; que los depósitos realizados a su libreta de ahorros del Banco Pichincha, son depósitos que, de vez en cuando, realiza su hermano por trabajos ocasionales que hace para él; que no tiene ningún ingreso económico estable. Se reproduce las siguientes pruebas a su favor: A fojas 7 y 8, Claudia Cáceres Moreno, Coordinadora Académica del IECE, certifica que el alimentario está inscrito en la Escuela de Química de la Facultad de Ingeniería Química, que inició su carrera en el periodo octubre 2007- febrero 2008, y la culminará en el periodo de marzo de 2013, más la tesis. De fojas 19 a 21, copias certificadas de la libreta de ahorros que mantiene el demandado en el Banco del Pichincha. De fojas 25 a 28, la Secretaría General del Banco del Pichincha C.A., con oficio No.SG-0562-2007 de 4 de octubre de dos mil siete, remite copias certificadas de los movimientos de la cuenta de ahorros de propiedad del demandado, desde abril de dos mil cinco

hasta marzo de 2007.- El demandado por su parte presenta las siguientes pruebas: A fojas 30 y 32, copias notariadas de un contrato de arrendamiento de una casa incluido el servicio de alimentación, cuyo canon de arrendamiento asciende a ciento veinte dólares mensuales. De fojas 32 a la 42, recibos por concepto de pago del canon de arrendamiento y del servicio de alimentación. A fojas 43, dos roles de pago a nombre del demandado correspondiente a los meses de febrero y marzo de dos mil siete, extendidos por el ISPOL, de los que se desprende que tiene el grado de mayor y que recibe líquido la cantidad de tres cientos cuarenta y ocho dólares mensuales. A fojas 45, el señor Registrador de la Propiedad del Cantón Quito, certifica que el alimentario y su hermano Carlos Roberto Patiño Córdova, son titulares de un departamento y un estacionamiento. De fojas 46 a 54, el Banco del Pichincha extiende el detalle de Movimientos de cuenta que mantiene el demandado en esa institución. SEXTO.- Las pruebas presentadas, han sido valoradas conforme lo previsto en el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil. Para la fijación de la pensión alimenticia se ha analizado las necesidades del beneficiario, quien es estudiante universitario y las facultades económicas del demandado, quien percibe líquido, la cantidad de tres cientos cuarenta y ocho dólares.- Por las consideraciones expuestas, este Juzgado RESUELVE: Aceptar la demanda de alimentos presentada por MILTON EMILIO PATIÑO CÓRDOVA y, fundamentado en lo que prescriben los artículos 12 8 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, fija a favor del alimentario MILTON EMILIO PATIÑO CÓRDOVA, por concepto de pensión alimenticia, la cantidad total de CIENTO VEINTE DÓLARES (us\$120,00) mensuales, más los respectivos beneficios de ley. Esta obligación se impone al señor MILTON ALBERTO PATIÑO SOSA. Oficiese al señor Pagador del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, o a quien haga sus veces, para que a partir de la presente fecha proceda a retener la pensión fijada en este auto resolutorio y entregue al beneficiario.- NOTIFÍQUESE.- Firma: El Juez Tercero de la Niñez y Adolescencia del Cantón Quito.

3.8. JUICIO DE DIVORCIO

En el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, en la misma audiencia de conciliación, los cónyuges acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores de edad después del divorcio, conforme el artículo 108 del Código Civil.

De igual manera en el juicio de divorcio por causales, el artículo 115 del citado Código estipula, que es requisito indispensable para que se pronuncie sentencia, que los padres resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores.

La Corte Nacional de Justicia dictó una resolución en este sentido la misma que se publicó en el Registro Oficial 705 de 7 de mayo de 1978 que dice: *“Los jueces no podrán expedir sentencia de divorcio, si antes en el juicio, los padres no han arreglado satisfactoriamente la situación de los hijos comunes, punto sobre el cual decidirá conforme a la ley en el mismo fallo.*

En consecuencia, la sentencia de divorcio debe resolver sobre los hijos menores como requisito para que se la dicte, así lo decide, una sentencia del Juzgado Primero Provincial de 14 de septiembre de 1976, que en la parte resolutive correspondiente establece: se ordena que los menores A M y R M queden bajo el cuidado y tenencia de la madre señora M T y que el padre doctor R C, suministre a favor de dichos menores en concepto de pensión alimenticia provisional por mesadas anticipadas la suma de mil dólares mensuales y proveerá, además, suministrará para los gastos de matrículas, vestuario escolar y gastos extras que demanda la educación de sus hijos.

Una sentencia de Corte Nacional de Justicia, establece como requisito el arreglar la situación de los hijos menores. El artículo 115 del Código Civil dispone claramente: para que se pronuncie sentencia de divorcio, es requisito indispensable que las partes resuelva sobre la situación económica de los hijos menores; por lo tanto, no habiéndose cumplido con esta exigencia legal, la sentencia que declara el divorcio, resulta intempestiva e improcedente.

Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se revoca la sentencia de la Primera Sala de la Corte Superior de Guayaquil y se rechaza la demanda. Para arreglar la situación económica de los menores dentro del juicio de divorcio, cuando el padre demandado se halle en rebeldía durante todo el juicio, el juez que conoce de la causa procederá a fijar la pensión alimenticia provisional en una cantidad simbólica que será fijada de acuerdo al salario mínimo de la profesión u ocupación que tenga el padre, estableciendo el juez de esta manera, la obligación del padre, pese a que no se la pueda cumplir de forma inmediata.

3.9. INCIDENTES

El artículo 737 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez podrá revocar, rebajar o aumentar la pensión, si para ello hay fundamento razonable. El artículo 107 del Código Civil, inciso sexto, establece: el juez podrá en todo tiempo modificar la providencia en lo referente al cuidado, educación y alimentos de los hijos aun cuando hubiere sido confirmada o modificada por el superior, siempre previa una tramitación igual a la que a la que sirvió de base para la resolución primitiva y encontrarse suficiente motivo para reformarla.

Cuando dentro de un juicio de divorcio se solicita una modificación de la pensión alimenticia, sea por aumento o disminución, luego de dictada la sentencia de divorcio, la solicitud será presentada al juez que conoció el asunto principal. Presentado el incidente, el juez de la causa luego de calificar y revisar la existencia de los requisitos legales, el juez la admitirá a trámite, ordenando correrse traslado al demandado con el incidente y el auto recaído.

Una vez contestado el incidente, dentro del término concedido por el juez, éste a petición de parte, señalará día y hora para que tenga lugar la audiencia de conciliación, dentro de la cual las partes harán sus exposiciones para tratar de llegar a la conciliación, base de esta diligencia.

De no llegarse a un acuerdo conciliatorio, el juez, a petición de parte abrirá el término de prueba por seis, para que las partes justifiquen el derecho de la actora y la cuantía de los bienes del demandado. El término de prueba es de seis días, por cuanto el artículo 108 del Código Civil estipula que para estos incidentes, la tramitación será igual a la que sirvió de base para la resolución original.

Practicadas las pruebas solicitadas por las partes, el juez de la causa dictará el auto respectivo, en el que aumente o disminuya la pensión alimenticia provisional, la misma que será fijada por los méritos de los autos, tomando en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 737 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el auto en que el juez fije la pensión alimenticia, cualquiera de las partes puede interponer el recurso de apelación que será concedido en el efecto devolutivo. De conformidad con el artículo 735 del Código de Procedimiento Civil, una vez concluido el término de cuatro días, concedido para la prueba, no se admitirá al demandado ninguna solicitud, ni de confesión judicial, mientras no se resuelva sobre la pensión provisional.

La ley nada dice respecto a la presentación de solicitud por parte del actor del juicio, pero tampoco se admitirá solicitud alguna, ya que para eso el juez de la causa concede el término de prueba correspondiente, dentro del cual las partes debieron presentar las solicitudes que creyeron necesarias; además, por el sentido riguroso de este proceso, dada su naturaleza no se puede aceptar dilataciones en la obtención de la pensión provisional de alimentos.

3.10. PENSION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

Para que exista una fijación de la pensión alimenticia a favor del reclamante, en contra del alimentante, ésta deberá ser planteada ante el órgano jurisdiccional correspondiente, o sea, ante el juez de la Niñez y la Adolescencia, mediante un proceso legal; es decir, en un juicio.

El Art. 137 del Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre fijación provisional de la prestación de alimentos dice:

“En la Audiencia de contestación y Conciliación del Juicio correspondiente, el juez deberá fijar una pensión provisional de alimentos, teniendo en cuenta el acuerdo de las partes, y si no lo hubiere, el mérito del proceso”, en concordancia con lo que dispone el Art. 724 del C.P.C.

La Norma de Aplicación dictada por la Corte Suprema de Justicia, Hoy Corte Nacional de Justicia expresa: Art. 1.- “En los juicios de alimentos que se tramitan con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia, en la primera audiencia de contestación a la demanda que se llevará a cabo dentro del término de treinta días

a partir de la citación de la demanda, el juez fijará obligatoriamente y con objetividad la pensión provisional que debe satisfacer el demandado, la que podrá ser ratificada, reformada o revocada luego de la presentación y evacuación de las pruebas correspondientes; sin perjuicio del acuerdo transaccional a que pudieran arribar las partes contendientes. Esta audiencia se realizará con la asistencia o en rebeldía de las partes”.

Art. 2.- La liquidación de las pensiones alimentarias en cada juicio la efectuará oportunamente el juez de la causa, a petición de la parte interesada.

Art. 3.- Esta Resolución tiene el carácter de obligatoria hasta que la Función Legislativa dicte las reformas a que hubiere lugar, y entrará en vigencia desde la publicación en el Registro Oficial.

(Rivas, pág. 328), en su libro Ciencia Jurídica en la Legislación Ecuatoriana, determina:

“Juicio de alimentos.- Tiene el objeto de determinar el derecho de quien reclama alimentos. El juicio reglamentado en la sección 14, artículos 735 al 741 del Código de Procedimiento Civil, responde a una necesidad inmediata del alimentario; por otra parte, el derecho y la cuantía de los alimentos dependen de las situaciones circunstanciales del alimentante y alimentario, circunstancias éstas que pueden variar en el tiempo.

Es comprensible, justo y legal que cuando cambien las mencionadas circunstancias, cambien también los derechos declarados en la decisión jurisdiccional”.

El Art. 131 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece la situación de los presuntos progenitores, por lo cual el juez podrá obligar al pago de prestación de alimentos a favor de un

niño, niña o adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no han sido legalmente establecidas, de acuerdo a las siguientes reglas:

1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado o demandada.
2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad, en tanto que ellos no sean utilizados para la fijación de la prestación definitiva, el Juez dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), del derechohabiente y del o la demandada.

Si el resultado es positivo, en la misma resolución que fije la prestación de alimentos definitivos, el Juez declarará la paternidad o maternidad del o la demandada y dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro Civil

3. Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento para que lo practique en el plazo máximo de diez días, vencido el cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el Juez procederá como en el caso de resultado positivo del examen.
4. Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla anterior, funda su negativa para la práctica del examen en la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlos, el Juez ordenará que la oficina Técnica practique un estudio social y emita el informe correspondiente en el plazo máximo de quince días.

En el caso de que el informe confirme la alegación del demandado, el Juez dispondrá que la Junta Cantonal de Protección de su jurisdicción, lo incluya de inmediato en un programa del sistema que cubra el costo del examen. Si el informe social es negativo

para la pretensión del demandado, se procederá en la forma dispuesta en la regla anterior.

5. Salvo el caso de carencia de recurso previstos en la regla anterior, los gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas procesales, incluidos los gastos del estudio social, cuando lo hubiere, serán sufragados por el presunto padre o madre, quienes tendrán derecho a que se es reembolse por quien ha reclamado la prestación, si el resultado de las pruebas descarta su paternidad o maternidad; y,
6. Se prohíbe practicar el examen señalado en la regla segunda de este artículo en la criatura que está por nacer; pero puede hacérselo en personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la relación de parentesco.

La definición jurídica de la palabra “*pensión alimenticia*”, puede ser un método para explicar en detalle las responsabilidades de los padres y la familia.

Por ejemplo, Argentina indicó al Comité que en el Estado parte, los padres tienen la obligación de satisfacer las necesidades de sus hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad (Argentina, II, párrafo 56 a 58).

El Código de la Familia de Bolivia, va incluso más lejos, al especificar la responsabilidad de los padres de asegurarse de que los niños adquieran un oficio o profesión para el futuro, si es necesario, cubriendo el costo de la formación (Bolivia II párrafo 99).

La Legislación de Costa Rica establece que la responsabilidad financiera para con el niño, incumbe primero a sus padres y después a sus hermanos mayores, sus abuelos, en este orden (Costa Rica II, párrafo 155).

PENSION PROVISIONAL

La fijación provisional de alimentos, está a cargo del representante del órgano jurisdiccional, quien la fija exclusivamente dentro de la audiencia de conciliación de la causa de alimentos, la misma que es susceptible de apelación. Sin embargo, ésta se la concede en el efecto devolutivo.

El Art- 137 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en concordancia con el Art. 724 del C.P.C. prescribe que:

“En la audiencia de contestación y conciliación del juicio correspondiente, el Juez deberá fijar una pensión provisional de alimentos, teniendo en cuenta el acuerdo de las partes y, si no lo hubiere, en mérito del proceso. De la resolución que se fije podrá apelarse solo en el efecto devolutivo, salvo que se limite a aprobar el acuerdo de las partes, en cuyo caso será inapelable”.

La fijación provisional alimenticia no es una decisión judicial discrecional, es una orden imperativa impuesta por el legislador.

El juzgador tiene la obligación en todos los casos, mientras continúa el trámite de sustanciación de la causa, de establecer el monto provisional de alimentos.

Existe además, del monto de la prestación alimenticia, otros subsidios o beneficios legales a favor del niño, niña o adolescente. El Art. 136 del Código antes citado, consagra los siguientes:

1. Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que, por su causa, corresponden al demandado. En este caso puede ser el subsidio que otorgan instituciones públicas y privadas por cada caga familiar, tanto en los contratos individuales como colectivos de trabajo.

2. Una pensión de asistencia adicional por cada una de las remuneraciones adicionales que establezca la ley y que en ningún caso excederán del monto efectivo que perciba el obligado por cada una de ellas. Habrá derecho de pensiones adicionales aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia, la pensión de asistencia adicional será igual al monto de la pensión fijada por el Juez;

En todas las instituciones públicas existe un bono adicional que se paga cada dos o tres meses y de acuerdo a esta regla, el alimentante deberá pagar una pensión de asistencia alimentaria adicional igual a la que recibe el beneficiario. De lo contrario, si no trabaja bajo relación de dependencia o si es variable su ingreso, la pensión de asistencia alimentaria adicional será igual a la fijada por el juez.

3. Percibir la parte de las utilidades legales del prestador de alimentos, por causa del hijo o hija beneficiarios.

4. El 5% del fondo de cesantía a que tiene derecho el prestador por cada hijo o hija.

El legislador debió precisar el porcentaje porque, de acuerdo a lo estipulado, no se sabe exactamente cuál debe ser el monto adicional del cual se debe beneficiar el niño, niña o adolescente.

Rachel Hodgkin y Peter Newell manifiestan que: Más que fijación de montos, en el Sistema Legal Ecuatoriano se encuentran pautas para el criterio judicial sobre la cuantía de la pensión. (Barros Errázuriz, 1931)

El Código Civil señala que, para la tasación de los alimentos que se deben por ley, se considerarán las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas (Art. 357 C.C.), debiendo además, considerarse que tanto los alimentos congruos como los necesarios, no se deben sino en cuanto los medios de subsistencia del alimentario no le alcanzan para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, o para sustentar la vida (Art. 358 C.C.).

Además, cuando se trata de menores de edad, los alimentos comprenden la necesidad de proporcionar al beneficiario (al menor) la enseñanza primaria (Art. 351 C.C.). El Código de la Niñez y la Adolescencia expresa que en la etapa de prueba deberá establecerse, por una parte, la capacidad económica del alimentante, y por otra, las necesidades del menor; establece también, que la obligación comprende la satisfacción de las necesidades de subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica

De igual forma, los autores (Wray, García, & Larenas , 1999, pág. 84), manifiestan que:

“En Colombia, donde también existen dos cuerpos normativos que regulan el mismo derecho a la pensión alimenticia, el Código Civil se refiere a la pensión provisional como aquella obligación impuesta por el juez, desde que en el juicio se le ofrezca fundamento plausible (Art. 417 C.C.C.), mientras que en la ley Orgánica de Defensa del Niño, se especifica que el derecho podrá ser establecido a partir de la presentación de la demanda, es decir, desde el inicio del juicio”.

La Legislación Cubana asigna un contenido diverso a la pensión alimenticia provisional, estipulando que es la obligación de dar alimentos que en circunstancias especiales o de urgente necesidad del alimento, es ordenada por el tribunal competente respecto de una sola persona, habiendo dos o más obligadas a concederlos (Art. 125 C.F.). Aquí la provisionalidad está dada más bien por el sujeto activo de la obligación legal, antes que por el momento procesal en que pueda fijarse.

En cuanto a la forma en que ha de cumplirse la obligación, el Código Civil, le atribuye al Juez la facultad de establecerla, y, aunque la obligación se soluciona mediante pago en efectivo, podría el juez disponer que para el efecto se consigne un capital en una cuenta de ahorros de una institución bancaria, para que la obligación se cumpla con los intereses que de dichos ahorros se obtenga, debiendo restituirse el capital cuando la obligación hubiere cesado.

3.11. PENSIONES ADICIONALES

Es la obligación de pagar la décimo tercera, décimo cuarta pensión alimenticia, cuyos montos serán iguales a una pensión ordinaria provisional o definitiva, según el caso. De conformidad con el Art. 136.- Subsidios y otros beneficios legales, del Código de la Niñez y la Adolescencia.- *“Además de la prestación de alimentos, el hijo o hija tiene derecho a percibir:*

- 1. Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que, por su causa, correspondan al demandado ;*
- 2. Una pensión de asistencia adicional por cada una de las remuneraciones adicionales que establezca la ley y que en ningún caso excederán del monto efectivo que perciba el obligado por cada una de ellas. Habrá derecho a pensiones adicionales aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia. Cuando las remuneraciones adicionales tengan un monto variable según los ingresos del trabajador, o el obligado no trabaje bajo relación de dependencia, la pensión de asistencia adicional será igual al monto de la pensión fijada por el juez;*

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, prescribe:

Art. 1.- El monto de la décimo cuarta pensión alimenticia será fijado por el juez en cada causa, independientemente de la pensión alimenticia mensual, teniendo en cuenta el número de hijos con derecho a percibir alimentos.

Art. 2.- La décimo cuarta pensión alimenticia, no podrá exceder de la décimo cuarta remuneración que rija para los servidores y trabajadores al tiempo en que deba ser cumplida; y, si fueren varios los beneficiarios, la suma de las pensiones de cada uno de éstos no podrá exceder del valor total de aquella remuneración.

Art. 3.- Esta Resolución entrará en vigencia, desde su publicación en el Registro Oficial. Además, el Organismo arriba mencionado, resuelve:

Art. 1.- Declarar que en los procesos de prestación de alimentos, no procede el pago de la décima quinta pensión.

Si el alimentante percibiera una parte de las remuneraciones adicionales, también las pensiones se pagarán en proporción al ingreso recibido y en las mismas fechas fijadas para el pago de las remuneraciones adicionales.

La ley de 1980, vigente en ese entonces, contiene una contradicción, puesto que mientras su artículo segundo manda que las pensiones deber ser pagadas por los alimentantes que percibieren efectivamente las remuneraciones adicionales por hallarse bajo relación de dependencia, el artículo seis ordena que *“todos los alimentantes perciban o no dichas remuneraciones, están obligados al pago de la pensión alimenticia adicional”*.

3.12. CREDITO PRIVILEGIADO

Escriche lo llama privilegio de acreedores y del derecho que tienen ciertos acreedores de ser pagados de los bienes del deudor con preferencia a los demás, aunque sean hipotecarios. Los derechos de los trabajadores constituyen crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios, al establecer que la remuneración del trabajo es inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias.

Todo lo que firma el patrono por razón del trabajo, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios: la pensión de alimentos es crédito privilegiado especialísimo con preferencia aún a los créditos privilegiados de primera clase, aún sobre la remuneración del trabajador

El Código Tributario pone en primer lugar el crédito de alimentos, confirmándose de esta manera que es un crédito especialísimo. El artículo 56 del Código Tributario norma el privilegio del crédito tributario sobre todos los bienes del deudor y tiene preferencia sobre cualquier otro, con excepción de: las pensiones alimenticias debidas por ley, los salarios y otros derechos de los trabajadores y los créditos hipotecarios y prendarios. El Código de la Niñez y la Adolescencia

garantizan el privilegio de los créditos alimenticios al establecer en el artículo 146, que el crédito del hijo o hija por concepto de prestación de alimentos, tiene privilegio de primera clase y preferirá a cualquier otro crédito.

El Código de la Niñez y la Adolescencia encierra dentro de sus disposiciones varias medidas cautelares en beneficio de los menores, prevé que en la concurrencia de algunos eventos, que de alguna manera afecte a los intereses patrimoniales del beneficiario de una pensión alimenticia, sea el crédito alimenticio el que primero deba ser atendido, con preferencia a cualquier otro.

Si el deudor de alimentos, a más de esta obligación, se le ejecuta por el pago de una obligación hipotecaria y por otra de carácter laboral; el momento de pago, se establecerá la forma de pago y como es lógico, el crédito de alimentos será el que en primer lugar deberá ser atendido; en segundo lugar el crédito laboral y por último el crédito hipotecario.

Siendo las pensiones alimenticias crédito privilegiado de primera clase, los alimentos debidos son inembargables. Al crédito alimenticio se le podría calificar de crédito privilegiado especialísimo de primera clase, porque el derecho de alimentos es un derecho personalísimo, que está destinado a satisfacer necesidades básicas del individuo y que no podrían ser desviados, porque estarían en contra de su propia naturaleza.

De acuerdo al Art. 146 Crédito privilegiado en concordancia con el Art. 2374, numeral 6 del C.C., manifiesta que: *“los créditos de alimentos a favor de menores.*

El Art. 2374 Primera clase de créditos privilegiados del Código civil vigente, prescribe:

La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran, en la parte pertinente:

6. Los créditos de alimentos a favor de menores

3.13. MEDIDAS CAUTELARES

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 143.- Medidas cautelares reales, prescribe que: *“Para asegurar el pago de la prestación de alimentos, el juez podrá decretar cualquiera de los apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil Arts. 939 al 944.*

Apremios son las medidas coercitivas o mecanismos de presión de que se vale un Juez o Tribunal para que sus providencias sean obedecidas por las personas que se resisten a cumplirlas dentro de los respectivos términos.

Para ejecutar la orden judicial en virtud de la cual el alimentante debe pagar las prestaciones alimenticias, nuestra Legislación ha establecido el apremio personal y el apremio real.

Según El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, apremio es la acción y efecto de apremiar, mandamiento del Juez, en fuerza del cual se compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa.

Recargo contributivo, por demora en pagar los impuestos. Auto o mandamiento judicial para que una de las partes devuelva sin dilación los autos.

Para (Sánchez Zuraty, pág. 70), apremio es la acción y efecto de apremiar. Es una medida coercitiva de que se vale el Juez o Tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen dentro de los términos respectivos (Art. 939 C.P.C.)

APREMIO PERSONAL

Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas se emplean para compeler a las personas a que cumplan, por sí, con las órdenes del Juez. Se ejecutarán por apremio personal únicamente las disposiciones que se dan para devolución de procesos o para ejecutar providencias urgentes, como depósito, posesión provisional, alimentos forzosos, arraigo y las demás que estén expresamente determinadas en la ley.

El Art. 141 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estipula:

“Apremio Personal.- En caso de no pago de dos o más pensiones de alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal del obligado hasta por diez días. En los casos de reiteración, este plazo se extenderá hasta por treinta días.

En la misma resolución que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y cuando proceda declaración juramentada, sobre el ocultamiento del obligado, por parte de quién solicita dicha medida.

Una vez pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos causados por el apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad inmediata del obligado.

Lo dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago directo asumió como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquél, el beneficiario haya dejado de percibir dos o más rentas, frutos u otras modalidades de pago en las que consista la prestación de alimentos, fijada por el Juez.

Si el monto adeudado corresponde a más de un año de pensiones de alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado, más los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento, en su caso”.

Algunos otros autores (Albán Escobar, págs. 163, 164), manifiestan que el apremio personal ha existido siempre como una forma de exigencia judicial en el pago de las pensiones alimenticias.

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, se debe recurrir a esta medida coercitiva con el fin de que el alimentante, ya que voluntariamente no ha cumplido con la obligación, la cumpla por la amenaza de la privación de su libertad y en otros casos extremos, para obtener la misma.

Si de la información que consta en la tarjeta de pago se aprecia que el deudor no ha pagado dos o más pensiones alimenticias, el Secretario del Juzgado, sentará la razón en ese sentido, correspondiéndole al Juez, conforme esta disposición legal, ordenar el apremio personal del moroso.

Solamente el peticionario deberá declarar bajo juramento indicando que se halla oculto en tal lugar. El plazo máximo de privación de la libertad es de diez días; sin embargo, cuando el deudor sea reincidente, este plazo se extenderá hasta un máximo de treinta días.

Si el deudor satisface la obligación incluyendo los gastos que haya demandado el apremio personal y el allanamiento, antes de la fecha fijada, puede recobrar su libertad. Si se para cumplir con la pensión alimenticia se constituyó usufructo de uso o habitación, cobro de cánones de arrendamiento, depósito de una suma de dinero u otra forma similar, el deudor está obligado a solucionar la falta de pago, lo que, en mi criterio, permite una efectiva protección al menor de edad.

Otro autor como Torres (Torres Chávez, 2003, págs. 107 - 109), en su libro Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia, opina que uno de los desaciertos que encuentra en la dogmática jurídica, es la confusión que hace el legislador entre “apremio” y “arresto”, medidas

de igual gravedad, pero de diferente entidad jurídica, incrementada con el “*allanamiento del lugar*”.

Otro tipo de medida coercitiva es la prohibición de salida del país y una posible prisión perpetua, hasta que pague, de modo íntegro, lo adeudado por un año o más de alimentos. Todo esto consta en esta disposición y se extiende en los siguientes artículos de este mismo título.

El Art. 141, en su primera parte establece el apremio personal en caso de no pago de dos o más pensiones de alimentos y más abajo dice que, el primer apremio será con prisión de hasta diez días; en caso de reiteración, este plazo se extenderá hasta 30 días, aclarándose que en la misma resolución del arresto, el Juez puede ordenar el allanamiento.

Las diferencias entre uno y otro están en que “*apremio*” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa: compeler u obligar a uno con mandamiento de autoridad, a que haga alguna cosa; en tanto que, arresto es una pena que consiste en la pérdida de la libertad. Si el llamado apremio primero y arresto después, hasta por treinta días, en cuyo caso ya no son simples medidas coercitivas de las que se vale cualquier juez o tribunal, sino que son propios y exclusivos de la ley penal, del juicio penal y de la detención penal.

El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, al referirse al término apremio manifiesta que: apremio es el mandamiento del juez, en fuerza del cual se compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa.

La restricción de la libertad o arresto, en cambio, consiste en la comparecencia del individuo para esclarecer los hechos delictivos o para cumplir una pena. Cabe anotar que, el Código Penal Militar, permite el arresto disciplinario como pena castrense por faltas de esa índole.

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 940, explica las diferencias de los apremios al manifestar que: “*Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas se emplean para*

compeler a las personas a que cumplan, por si, con las órdenes del juez, y real cuando la orden judicial pueda cumplirse aprehendiendo la cosas o ejecutando los hechos a que ella se refiere”.

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el primer inciso del artículo 141, expresa que el apremio o arresto, puede durar hasta 30 días, lo que no se compadece con la naturaleza momentánea de esta figura que se la utiliza hasta aclarar una situación, rendir una declaración, entregar documentos o pagar una o más pensiones alimenticias, etc.

El inciso final del antes mencionado artículo, contempla una disposición incomprensible de arresto indeterminado que podría interpretarse como prisión perpetua, en caso de que lo estipulado no se cumpla como es mandatario, textualmente expresa:

“la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado más los gastos de diligencia del apremio y del allanamiento”, en los casos que éstos correspondan a más de un año impago de pensiones alimenticias.

Debemos resaltar que, el Código de la Niñez y la Adolescencia no es de tipo penal, en tal virtud, no puede imponer penas ni indirectas, ni obscuras peor sujetas a la interpretación subjetiva, como sucede con la desafortunada redacción del Art. 141, por lo cual me permito sugerir dos enmiendas que se deberían hacer a este artículo en la parte pertinente:

1. Cuando fuera imposible cobrar pensiones alimenticias o de esta índole; y,
2. Cuando el demandado, pudiendo pagarlas, se niega a hacerlo.

Como en el segundo caso, podemos apreciar que se trata de un evidente acto de rebeldía, para dar cumplimiento a un deber familiar, dicho acto da origen a un delito que debe ser tipificado y castigado por el Código Penal, hasta con seis meses de prisión correccional como máximo, en cada ocasión en que el demandado se negase a cumplir con su obligación de pagar las pensiones alimenticias, estando en condiciones de hacerlo.

PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS

La prohibición de salida del país es otra medida coercitiva que forma parte del apremio personal, dictada con el fin de evitar que el alimentante abandone el país sin que, previamente, otorgue garantía personal o real suficiente y a satisfacción del Juez. (Sánchez Zuraty, págs. 86 , 87)

El artículo 142 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estipula que:

“A petición de parte o cuando el caso lo amerite en la primera providencia de la demanda de alimentos, el Juez decretará sin notificación previa al demandado, la prohibición de que el demandado se ausente del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a los funcionarios encargados de hacerla efectiva. Igual prohibición se extienden a aquellos que se encuentren en mora de la resolución judicial”.

EL ARRAIGO

La esencia del arraigo es la misma de la prohibición de salida del país, con la diferencia que esta medida se aplica a los extranjeros- Sin embargo, debido a un tecnicismo jurídico, ya no existe diferencia entre la prohibición de salir del país y el arraigo, porque en la práctica se las aplica indistintamente en uno y otro caso. (Osorio, 1982)

Para Escriche, el arraigo es otro tipo de apremio personal que consiste en: asegurar la responsabilidad a los resultados de un juicio. Legislaciones como la Argentina, el arraigo constituye una de las excepciones previas que pueden ser opuestas a la demanda, cuando el demandante no tuviere domicilio o bienes inmuebles en la República.

Según, (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1998, pág. 38), se utiliza normalmente la expresión arraigo o arraigar en juicio para referirse al aseguramiento de las resultas del mismo.

Se da en los casos en que hay peligro de que, por insolvencia, resulte ilusorio el derecho de una de las partes.

MEDIDAS CAUTELARES REALES

El Art. 143 del Código de la Niñez y la Adolescencia, para asegurar el pago de la prestación de alimentos, determina que el juez podrá decretar cualquiera de los apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil.

El apremio real, es una medida coercitiva en virtud de la cual se aprehende cosas o bienes de propiedad del deudor cualquiera sea su naturaleza. Se produce cuando la orden judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas, o ejecutando los a que ella se refiere, según lo prescribe el artículo 940 del C.P.C. El apremio real se lo ejecuta a través del embargo y retención.

Existe apremio real cuando la orden judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas, o ejecutando los hechos. Por regla general, todas las disposiciones del juez o tribunal se ejecutan por apremio real, a excepción de las expresamente determinadas en la ley para ejecutarse por apremio personal.

EL EMBARGO

También forma parte del apremio real por el cual el moroso de la prestación alimenticia al incumplir con el mandato de pago dictado por el juez competente, dispone la aprehensión de bienes raíces o muebles entregándolos al depositario judicial quien se encargara de su cuidado de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.

Los bienes, una vez embargados, se procederá conforme las normas establecidas para ejecutar la sentencia en los juicios ejecutivos; embargo que incluye los bienes puntualizados en el Código Civil.

RETENCION

La retención es un tipo de embargo que, por lo general, se hace sobre dinero depositado en alguna institución financiera del país. Se realiza mediante la notificación a la persona en cuyo poder estén los bienes que se retengan, para que ésta, bajo su responsabilidad, no pueda entregarlos sin orden judicial. El tenedor de los bienes, tiene tres días para excusarse del encargo, en cuyo caso, los pondrá a disposición del juez, quien a su vez, ordenará que los reciba el depositario judicial.

Tanto el apremio personal como el real pueden cesar cuando el prestados rinda suficiente garantía o fianza a satisfacción del Juez, cuya responsabilidad es proteger el derecho a la subsistencia o sobrevivencia del niño, niña o adolescente.

Para el efecto, el Art. 144 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice:

“Los apremios y prohibición a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor principal”. (Albán Escobar, pág. 163 a 166)

Se considera al crédito alimentario que tiene la hija o hijo como privilegio de primera clase, prevaleciendo sobre cualquier otro crédito. Además, el alimentante cuando se halle en mora en el pago de las prestaciones alimenticias le está denegado solicitar la patria potestad del hijo o hija beneficiario, de conformidad con lo que establecen los artículos 145 y 146 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

TERMINACION DE LOS APREMIOS

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 144 determina que los apremios y prohibición de salida del país a los que se refieren los artículos precedentes, podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal suficiente por el Juez. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor principal.

(Torres Chávez, 2003), en su obra Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia, opina que según esta disposición los apremios y prohibición de salir del País, podrán cesar si el obligado rinde garantías real o personal; o sea, si rinde fianza que es una obligación, en virtud de la cual una o más personas responden de la obligación del que debía prestar las pensiones alimenticias.

La fianza puede ser convencional, legal o judicial. En este caso, se trata de una fianza judicial, porque tiene que ser declarada por el Juez; también se puede rendir fianza hipotecaria o bancaria, siempre que se cuente con la aprobación del Juez.

El Código de Procedimiento Civil trata sobre los apremios en los artículos 939 al 944. El Art. 941, textualmente manifiesta que: *“Los apremios se ejecutarán por el alguacil o sus dependientes sin el menor retardo y sin admitir solicitud alguna”*.

Art. 943: *“Se ejecutarán por apremio personal únicamente las disposiciones que se den para...alimentos forzosos...”*

CAPITULO IV

FORMA Y CUANTIA DE LOS ALIMENTOS

Los alimentos se deben desde la primera demanda y se pagarán por mesadas anticipadas (Art. 359). Los alimentos se pagan normalmente en dinero.

Pero bien podría el alimentario aceptar que se los den en especie, y disponerlos así el juez, si resulta más conveniente. No cabe que sea el alimentante el que escoja, porque sería humillante y se prestaría para el incumplimiento.

Los alimentos que se dan voluntariamente, antes de la demanda judicial, cumpliendo las obligaciones naturales entre cónyuges, padres e hijos, y entre parientes, son generalmente en especie; pero una vez que se llega a litigio judicial, no suele quedar otro sistema práctico que el de fijación de una pensión en dinero.

Como una de las necesidades que los alimentos deben cubrir es la de vivienda, también sería factible cumplir una parte de la deuda alimenticia proporcionando la habitación adecuada. Una sentencia argentina dice que *“cabe deducir de la pensión alimenticia el alquiler de la finca que ocupa el alimentario”*.

Corresponde al juez fijar estos y otros detalles de la forma en que se han de rendir los alimentos. También debe el juez determinar las garantías de cumplimiento, que a veces, van relacionadas en la misma forma de pagar los alimentos. El artículo 361 permite que el juez ordene consignar un capital en una caja de ahorro u otro establecimiento análogo, para que, se paguen pensiones con los intereses de dicho capital. El artículo 738 del Código de Procedimiento Civil, en forma más imperativa dispone que si el alimentante no tiene bienes raíces que aseguren el pago de la pensión, el juez dispondrá, que consigne una cantidad de dinero con cuyos réditos se pueda hacer el pago, “o cualquiera otra medida que asegure el pago de la pensión”. Se puede poner prohibición de enajenar bienes, o establecer una hipoteca, etc. También puede el juez señalar la persona que ha de administrar a pensión.

Una vez extinguida la obligación alimenticia, se deben cancelar esas sanciones y devolver aquellos bienes al alimentante o a sus herederos. El cumplimiento de la obligación queda también garantizado indirectamente por medio de sanciones. Así, los padres que no alimenta a sus hijos pueden ser suspendidos o privados de la patria potestad.

4.1. DETERMINACION PORCENTUAL

El Art. 359 del Código Civil en concordancia con el artículo 134 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establecen como forma ordinaria de pagar los alimentos, la pensión mensual en dinero al decir que se pagará por mesadas anticipadas

Mesada es la porción de dinero que se da o paga todos los meses, pero lo que expresa el artículo 359 del Código Civil en relación con las demás disposiciones relativas con la tasación y cuantía de los alimentos, se trata de una porción de dinero que el alimentante debe dar al principio de cada mes al demandante, de manera que éste pueda realizar los gastos del mes.

El Código Civil ha previsto que esta forma de realizar los pagos puede no ser la más conveniente; en consecuencia dispone en el artículo 361 que el juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se consigne, a este efecto, en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se restituya al alimentante o sus herederos, luego que cese la obligación.

Esta disposición faculta al juez, por ejemplo, a aceptar el ofrecimiento del demandado de dar vestido, vivienda y alimentos. Esto permite a su vez, la suficiente libertad de criterio para poder resolver lo más conveniente de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Cuando las partes no han podido establecer el pago de los alimentos, es común que dichos alimentos se paguen en dinero, por ser la forma más fácil de determinar la cuantía de la obligación.

En opinión de Juan Larrea Holguín los alimentos que se deben al cónyuge y a los hijos, normalmente deben darse en especie, y por lo mismo éste depende de la permanencia en el hogar. Solamente si la ausencia es justificada, entonces se deben alimentos y se pagan

normalmente en dinero. La prestación de alimentos mediante una suma de dinero es más ventajosa que cualquier otra, ya que permite al acreedor formarse y asegurarse su sistema de vida con su propia administración lo que le proporcionaría cierta independencia.

En nuestra Legislación, le corresponde al juez fijar la forma en que se han de rendir los alimentos, de conformidad con lo que establece el artículo 361 del Código Civil en concordancia con el artículo 134, literal b del Código de la Niñez y la Adolescencia que estipula que *“El depósito de una suma de dinero, la constitución de un usufructo, uso o habitación, la percepción de una pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario”*.

Según el artículo 738 del Código de Procedimiento Civil determina que:

“Si el alimentante no tuviere bienes raíces que aseguren el pago de la pensión alimenticia, el juez dispondrá, en cualquier estado de la causa, que dicho alimentante consigne una cantidad de dinero con cuyos réditos se pueda hacer el pago, según lo dispuesto en el artículo 379 del Código Civil, o cualesquiera otras medidas que aseguren el pago de la pensión; y de lo resuelto a este respecto, no se concederá apelación sino en el efecto devolutivo.

El juez según los casos, cuando el alimentante lo pudiera, podrá designar una persona que administre la pensión alimenticia, reglamentando la forma de esa administración”.

El Código Civil en los artículos 357 al 361, establece las reglas que el juez debe seguir para fijar la pensión alimenticia, reglas que determinan la cuantía de los alimentos, o sea, de la pensión que debe pagar el demandado. El artículo 375 del Código del Código Civil manifiesta que el juez fije la cuantía en que deben prestarse los alimentos tomando en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas, así como, la necesidad del acreedor en cuanto sus medios de subsistencia no le alcancen para vivir modestamente de acuerdo a su posición social o para sustentar la vida.

Una de las condiciones para la existencia de la obligación alimenticia es que el deudor de los alimentos tenga los recursos suficientes para poder atender a éstos, de conformidad con lo que dice el artículo 357 del Código Civil.

La tasación se dará exclusivamente cuando haya lugar a ella para imponer al demandado el pago de una prestación alimenticia. Si el demandado hubiere probado en juicio que sus facultades eran escasas o que apenas le alcanzaban para atender los gastos de su familia y los suyos propios, no habría lugar a la tasación de los alimentos y el demandado debería ser absuelto de prestar esa obligación.

Para apreciar las facultades del deudor el juez deberá tomar en consideración, no solo los bienes que constituyen el patrimonio del deudor y que determinan su renta, así como el producto de su trabajo o industria, sino también las deudas y demás obligaciones pasivas.

Si el patrimonio estuviere tan grabado que solo permitiere la subsistencia personal del demandado, no habría lugar al pago de los alimentos exigidos, porque no sería posible que se prive a una persona de cubrir sus propias necesidades.

Al mismo tiempo, el juez debe tener en cuenta las circunstancias domésticas del deudor; es decir, el número de personas que forman su familia y viven a sus expensas, los gastos de educación, vestuario y salud de sus hijos; los gastos de casa, etc. Otro de los requisitos que se relaciona con la necesidad del acreedor de la obligación alimenticia es que éste se encuentre en un estado de necesidad y que no pueda cubrir por sí mismo sus necesidades básicas.

La dificultad radica en determinar en qué momento se halla en necesidad y que sus esfuerzos no le bastan y se encontrara en esta situación para reclamar alimentos.

a. CRITERIO JUDICIAL

De acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez, en su artículo 135, **Criterios para determinar el monto de la prestación.**- Para establecer la cuantía y forma de prestación de los alimentos, el juez deberá tomar en cuenta:

1. Las necesidades del beneficiario; y,
2. Las facultades del obligado, apreciadas en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios y a los recursos presuntivos que se puedan colegir de su forma de vida.

Para la fijación de la pensión alimenticia se debe tomar en consideración el costo de mantener una vida, donde se incluye las necesidades que dicha pensión debe satisfacer, entre ellas: alimentación, vestido, habitación y, si el alimentario es menor de dieciocho años, brindarle la enseñanza primaria y el aprendizaje de alguna profesión u oficio. También se adicionan los gastos por enfermedad, pero no contempla el pago de gastos suntuarios o superfluos, como tampoco, de las deudas del alimentario.

En la fijación de la pensión alimenticia también se debe tomar en consideración la capacidad económica del alimentante; es decir, sus posibilidades de cumplir con la obligación.

No existe norma en la ley que determine una cantidad como pensión alimenticia; tampoco se ha encontrado jurisprudencia aplicable.

4.2. LOS AUTOS SOBRE ALIMENTOS NO CAUSAN EJECUTORIA

El artículo 781 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez en cualquier estado de la causa podrá revocar la pensión alimenticia, así como rebajarla o aumentarla si para ello hubiere fundamento razonable.

El artículo 166 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece una norma similar a la anterior que dice El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia podrá reformar la pensión alimenticia rebajándola, aumentándola o suspendiéndola, si hubiere fundamento para ello.

La reclamación sobre aumento o rebaja o suspensión de la pensión de alimentos se tramitará como un incidente dentro del mismo juicio de alimentos y con citación al demandado.

A su vez el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil expresa: las resoluciones que se tomen sobre alimentos no causan ejecutoria. Se dice que una sentencia se encuentra ejecutoriada cuando adquiere un carácter definitivo.

El artículo 317 del Código de Procedimiento Civil enumera las causas por las que una sentencia se ejecutoria:

- a) Por no haberse recurrido de ella dentro del término legal;
- b) Por haberse desistido del recurso interpuesto;
- c) Por haberse declarado desierto el recurso;
- d) Por haberse declarado abandonada la instancia o el recurso; y
- e) Por haberse decidido la causa en última instancia

Dada la naturaleza peculiar del juicio de alimentos, los fallos que fijan una pensión será siempre susceptibles de modificación, ya sea de aumento, revocatoria o disminución.

Tanto el Código de Procedimiento Civil como el de la Niñez y la Adolescencia establecen que los cambios en la pensión alimenticia se dan cuando para ello hubiere fundamento razonable. Este fundamento lo encontramos en varias causas como el aumento o disminución de la capacidad económica del alimentante o de las necesidades del alimentario, cambio de las circunstancias domésticas del demandado, edad del actor siempre que esté en condiciones de velar por su propia subsistencia.

El artículo 189 del Código de Procedimiento civil expresa que, sentencia es la decisión del juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio. En los autos en los que se fijan los alimentos, no se utiliza la frase de administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley que se usa en las sentencias que se dictan en otro tipo de juicios.

La providencia en la que el juez fija la pensión alimenticia, no es sentencia, pero se la conoce como auto con fuerza de sentencia, ya que es la decisión del juez que resuelve sobre asunto principal del juicio.

Una sentencia de la Corte Nacional de Menores de 1950 proclama: de acuerdo con la ley las resoluciones que se pronuncian sobre pensiones alimenticias no causan ejecutoria. Igualmente la ley prohíbe la renuncia al derecho de reclamar alimentos.

Una transacción en la que se pretenda mantener a perpetuidad una misma suma para alimentos de un menor, significará en el fondo una renuncia al derecho del menor a ser alimentado de acuerdo a sus necesidades y en razón de la cuantía de los bienes del alimentante, factores que son susceptibles de modificación con el paso del tiempo.

El juicio de alimentos tiene por objeto determinar el derecho de quien reclama alimentos. Este reglamentado por el Código de Procedimiento Civil se refiere a todos los alimentarios que tuvieren derecho a reclamarlos por si mismos o por medio de sus representantes, como en el caso de un menor de edad.

El Código de La Niñez y la Adolescencia también reglamenta este juicio y se refiere a todo ser humano desde su estado prenatal hasta los 18 años de edad, conforme el artículo 3 del citado Código; es decir, privativamente menores de edad.

El juicio de alimentos responde a una necesidad inmediata del alimentario. Por otra parte el derecho y la cuantía de los alimentos dependen de las circunstancias, tanto del alimentante

como del alimentarlo, las mismas que varían con el tiempo. En consecuencia el fallo, en estricta lógica jurídica no puede tener el carácter de cosa juzgada, que tienen las sentencias ordinarias.

Es comprensible, justo y legal que cuando cambien las circunstancias mencionadas deban también cambiar los derechos declarados en la decisión judicial, de conformidad con el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, al manifestar que las resoluciones sobre alimentos no causan ejecutoria, lo que significa que carecen de autoridad de cosa juzgada y se puede pedir su modificación en cualquier tiempo.

La cosa juzgada es una institución jurídica que tiene por objeto garantizar, en la medida de lo posible, la solución de un litigio presentado ante los jueces. En la cosa juzgada intervienen dos elementos:

- a) Identidad objetiva
- b) Identidad subjetiva

La primera consiste en que se demande una misma cosa, cantidad o hecho, fundándose en la misma causa, razón o derecho; y la segunda, constituida por la intervención de las mismas partes, según lo establece el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.

El auto que fija los alimentos no tiene la condicionalidad de cosa juzgada y no se halla comprendido en la regla general porque en el intervienen al inicio elementos completamente circunstanciales.

El Doctor Bolívar Vergara manifiesta que es indispensable señalar que se hallan reconocidos en la legislación dentro del campo civil la existencia de sentencias y autos interlocutorios que no producen firmeza, es decir, no causan ejecutoria, no llegan a presentar los efectos de la cosa juzgada.

En los autos tenemos:

- a) Los que resuelven la petición de alimentos

4.3. APELACION DE LOS AUTOS SOBRE ALIMENTOS

El artículo 290 del Código de Procedimiento Civil establece que auto es la decisión del juez sobre algún incidente del juicio. El recurso es la acción que queda a la persona condenada en juicio para poder acudir a otro juez o tribunal superior solicitando que se enmiende el agravio que cree habersele causado.

Para Escriche, apelación es la reclamación o recurso que alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o tribunal superior para que reponga o reforme la sentencia del inferior.

El recurso de apelación es el más importante y común de todos los recursos ordinarios. Doctrinariamente este recurso se lo considera como un remedio procesal, cuyo objetivo es lograr que el superior jerárquico revoque o reforme un decreto, auto o sentencia del inferior.

El artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, proclama: siempre que la ley no deniegue expresamente un recurso se entenderá que lo concede. A su vez el artículo 345 del mismo cuerpo legal establece, apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o tribunal superior para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia del inferior.

Una vez que se ha dictado la resolución que fija la pensión alimenticia, cualquiera de las partes puede apelar del fallo dictado dentro del término de tres días, conforme al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, además el artículo 781 regula también el recurso de apelación cuando el juez revoca, rebaja o aumenta la pensión provisional de alimentos, de igual que el artículo 782 que establece la impugnación sobre las medidas que tienden a asegurar el pago de la pensión.

El artículo 354 de Código de Procedimiento Civil establece que la apelación de un fallo se lo puede conceder en el efecto devolutivo y en el suspensivo o solamente en el devolutivo.

4.4. TERMINACION DEL DERECHO DE ALIMENTOS

Respecto de la extinción del derecho de alimentos, el artículo 147 del Código de la Niñez y Adolescencia, estipula: *“El derecho para reclamar y percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas:*

- 1. Por la muerte del titular del derecho;*
- 2. Por muerte de todos los obligados al pago;*
- 3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del derecho, según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 128, con la salvedad expuesta en el numeral 3 del mismo artículo;*
- 4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban los alimentos a favor del adulto; y,*
- 5. Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que causó la fijación de la prestación.*

De conformidad con lo que dispone el Art. 360 del Código Civil **Tiempo hasta el cual se deben alimentos.**- Los alimentos que se deben se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda.

Con todo ningún varón de aquellos a quienes solo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido dieciocho años, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la obligación del alimentante.

El Código del Trabajo expresa que toda persona que pase de sesenta años, se entenderá incapacitada para el trabajo, criterio que se aplica para la concesión de indemnizaciones laborales y que se puede aplicar también en el caso de las pensiones alimenticias.

El derecho de alimentos puede también terminar en el caso de injuria atroz cometida por el alimentario contra el alimentante. El sistema legal vigente distingue la injuria leve, injuria grave e injuria atroz.

No obstante, constar en la ley, no existe una clara definición sobre lo que se puede considerar como una injuria atroz. Para poner un ejemplo se podría decir que, existe injuria atroz cuando el agravio menoscaba la honra del injuriado.

Generalmente, la doctrina considera como injuria atroz, los actos que dan lugar al desheredamiento, la indignidad para heredar o la revocatoria de las donaciones, así como a los que se refieren los artículos 1010 y 1233 del Código Civil, como: homicidio u otros atentados contra la vida, la honra o los -bienes de una persona o de su cónyuge, ascendiente, descendientes o consanguíneos hasta el cuarto grado; no socorrer a esas personas en el estado de demencia, ocultar dolosamente un testamento, etc.

“Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que motivaron la demanda” (Art. 360). Por tanto, si se conceden a un menor de edad, cesa el derecho cuando llega a la mayoría, salvo que, como dice el mismo artículo 360 “algún impedimento corporal o mental lo haya inhabilitado para subsistir de su trabajo”.

La circunstancia que principalmente debe perdurar, y de la que depende el derecho, es, pues, la necesidad de los alimentos por parte del beneficiario. Si cesa la necesidad, desaparece el derecho, y si revive la necesidad, también reaparece el derecho.

La continuación del derecho de alimentos está subordinada, por la misma razón anteriormente expuesta, a la capacidad económica del alimentante. La necesidad del alimentario se supone en el caso de ser menor de edad. Pero si ya cumple los 21 años, deberá probar el interesado su imposibilidad de ganarse la vida, por enfermedad u otro hecho semejante.

El Código del Trabajo dice que toda persona que pase de sesenta años se entenderá incapacitada para el trabajo y este criterio que se da para efectos de indemnizaciones laborales podría aplicarse, por analogía para pedir alimentos; y aunque no descargaría totalmente de la prueba, sería una base suficientemente sobre la cual pedir alimentos.

La ley señala el límite normal de la pensión alimenticia, en la fecha del cumplimiento de los 21 años, y fuera de esta determinación, no cabe otra establecida por propia voluntad de las partes, ya que otro límite sería equivalente a una renuncia del derecho.

Otra causa por la que puede terminar el derecho de alimentos consiste en la injuria atroz cometida por el alimentario contra el alimentante. Nuestro sistema legal distingue la injuria no grave, la injuria grave y la injuria atroz, que tiene la máxima gravedad. La injuria grave autoriza para disminuir los alimentos congruos a los simplemente necesarios. En cambio, la injuria atroz de cualquier persona hace que ésta pierda su derecho de alimentos.

No existe una definición legislativa de lo que ha de entenderse por injuria atroz; hay que entender a las diversas circunstancias, que más o menos influyen en el efecto que la injuria haya producido en menoscabo de la honra del injuriado.

La doctrina considera generalmente que constituyen injuria atroz aquellos hechos que dan lugar al desheredamiento, la indignidad para heredar o la revocatoria de las donaciones y que se señalan principalmente en los artículos 1231 al 1234 del Código Civil, como el homicidio u otros atentados contra la vida, la honra o los bienes de una persona o de su cónyuge, ascendientes, descendientes consanguíneos hasta el sexto grado, no socorrer a esas personas en estado de demencia, ocultar dolosamente un testamento, etc.

Otro punto de referencia para apreciar lo que son las injurias atroces, puede ser el Código Penal; en él se determina cuáles se consideran injurias graves, y las más severamente sancionadas, serán sin duda las atroces.

Un caso expresamente señalado por la ley, en el que se pierde el derecho de alimentos, es el de haber intervenido en el fraude, falsedad u ocultamiento de un parto. Ninguna de las personas que hayan participado en esas actuaciones dolosas puede demandar alimentos al hijo suplantado.

Los alimentos terminan con la muerte sea del alimentante o del alimentado. Para este caso, el Art. 370 dispone que se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el alimentario no hubiere devengado, por haber fallecido.

Como se pagan las pensiones por mesadas anticipadas, si el alimentario muere durante el mes, antes de que transcurra todo el mes, por consiguiente antes de devengar la pensión recibida, no se podrá pedir a los herederos que devuelvan la parte correspondiente a los días restantes del mes, desde la fecha de la muerte.

Esta regla se debe aplicar en el caso de que voluntariamente se hubiere adelantado pensiones por un período superior, ya que la ley no hace distinción. También es aplicable la misma regla, a otros casos de terminación del derecho; en efecto, si termina por injuria atroz, parece equitativo que el ofendido pueda reclamar devolución de los anticipos no devengados.

La mujer casada debe recibir los alimentos normalmente en el hogar, y pierde su derecho si se ausenta contra la voluntad del marido y sin causa justificada, de modo que en tal circunstancia termina su derecho de alimentos.

ALIMENTOS VOLUNTARIOS

De conformidad con el artículo 365 del Código Civil, puede establecerse una obligación alimenticia voluntaria, sea en testamento o por donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del testador o donante en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo.

El artículo 366 del mencionado Código se refiere a las asignaciones alimenticias a favor de personas que por ley no tengan derecho a alimentos, se imputarán a la porción de bienes que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

Y si las que se hacen a personas que por ley tienen derecho a alimentos, fueren más cuantiosas de lo que corresponda según las circunstancias, el exceso se imputará a la misma porción de bienes.

Antes de 1956, existían las asignaciones forzosas de alimentos, pero fueron derogadas ese mismo año, y desde entonces no cabe decir que una persona tenga derecho a alimentos dentro de la sucesión de un individuo.

En todo caso, en los alimentos voluntarios, la regla fundamental es la que prevalece la voluntad de quien o quienes los hayan instituido. Las normas que libremente se fijen, son las que regulan este derecho

Las causas de extinción de la obligación legal entre parientes son las siguientes:

- 1.- muerte del alimentario o titular del derecho a los alimentos;
- 2.- muerte del alimentista u obligado a prestar los alimentos;

- 3.- reducción de la fortuna del alimentista hasta el punto de no poder prestar los alimentos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia;
- 4.- cuando el alimentario, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación;
- 5.- cuando el alimentario sea descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa.

Cualquiera de estas causas dan lugar a la extinción de la obligación alimenticia; sin embargo, esta opinión dominante no se ajusta a la realidad ya que, de acuerdo a la doctrina, la única causa que extingue verdaderamente la obligación alimenticia es la muerte del alimentario. Las demás causas suponen, más que una extinción, una subrogación en el sujeto pasivo, o una suspensión de la obligación, o una sanción,

La muerte del alimentario, es un caso típico de extinción de la obligación alimenticia. El Código Civil, en el artículo 32, manifiesta que se extingue por la muerte de las personas, por lo que con la muerte del alimentario desaparece no solo el sujeto activo de la obligación, sino, además, la causa, por así decir, que dio lugar al nacimiento de aquélla.

En cambio, la muerte del alimentista, parece a primera vista que debería originar la extinción de la obligación alimenticia al desaparecer el sujeto pasivo de la misma. Pero no se debe olvidar que no es un solo sujeto el obligado a prestar alimentos sino que, al menos en potencia, lo son todas las personas enumeradas en el Art. 143, conservado el orden prelatorio previsto en el artículo 144.

Por lo tanto, mientras subsista el estado de necesidad en el alimentario y éste viva, la obligación no se extingue y la muerte del alimentista que prestaba los alimentos, no origina la extinción de la obligación, sino la subrogación en la deuda por parte del pariente que resulte designado según los arts. 143 y 144.

Claro está que al verificarse el cambio subjetivo se puede verificar también un cambio objetivo ya que la prestación de alimentos está en relación, no sólo con las necesidades del alimentario, sino también con las posibilidades en el sujeto pasivo que se subroga al alimentista fallecido; lo que se produce, es más bien una especie de novación.

Las causas tercera (reducción de la fortuna del alimentista) y cuarta (cuando el alimentario mejore de fortuna hasta el punto de no ser necesaria la pensión alimenticia para atender sus necesidades) tampoco constituyen causas de extinción de la obligación alimenticia sino, más bien, implican una suspensión en la prestación.

Si la fortuna del alimentista (causa tercera) mejora de nuevo, continúa obligado a prestar alimentos al alimentario si éste continúa en estado de necesidad. Y asimismo si por problemas económicos posteriores del alimentario (causa cuarta) disminuye de nuevo hasta el punto de no poder atender a sus propias necesidades, la obligación, que continúa viva, se actualiza de nuevo. (Beltrán Heredia, 1958, págs. 59 - 61)

El artículo 1191 dispone que si se legaren alimentos voluntarios, se deberán en la forma y cuantía en que el testador acostumbraba suministrarlos a la misma persona; y a falta de esta determinación, se regularán tomando en cuenta la necesidad del legatario, sus relaciones con el testador, y el caudal del patrimonio en la parte en que el testador ha podido disponer libremente.

Si el testador no fija el tiempo que ha de durar la contribución de alimentos, se entenderá que debe durar toda la vida del legatario. Si alegare una pensión anual para la educación del legatario, durará hasta que cumpla veintiún años, y cesará si muere antes de cumplir esta edad.

El Art. 1414 establece que aún en el caso de alimentos voluntarios, las pensiones se deben pagar por mensualidades adelantadas, salvo que se haya establecido otra cosa, pues prevalece la voluntad privada.

Finalmente el Art. 1225 dice: *“Los asignatarios de alimentos estarán obligados a devolución alguna en razón de las deudas o cargas que gravaren el patrimonio del difunto; pero podrán rebajarse los alimentos futuros que parezcan desproporcionados al caudal del patrimonio efectivo”*.

Este artículo, se explicaba perfectamente cuando existían las asignaciones forzosas de alimentos, pero hoy que dichas asignaciones solamente podrían ser voluntarias, no parece justa dicha regla, ya que permite sustraer del patrimonio sumas que deberían servir para pagar primeramente las deudas.

De todos modos, como la ley no hace la salvedad correspondiente a los alimentos simplemente voluntarios, y se refiere en general a asignaciones de alimentos, lo que se haya pagado a dichos asignatarios, no puede ser exigido posteriormente para cubrir los créditos del patrimonio heredado.

REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Según los artículos 59, 67 y 68 del Código Sánchez de Bustamante, la materia de alimentos se somete a la ley personal del alimentado en unos aspectos, y tiene carácter de orden público internacional en otros.

Se rige por la ley personal del alimentado, el concepto legal o calificación de los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de este derecho.

Son de orden público internacional: la regla que da al hijo el derecho de alimentos, las que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, su reducción o aumento, la oportunidad en que se deben, la forma del pago, así como las reglas que prohíben renunciar este derecho.

Las reglas del Código Sánchez de Bustamante coinciden con la doctrina generalmente admitida, ya que garantiza el valor de los derechos adquiridos, en esta materia, y somete su ejercicio, por regla general, a la legislación local.

En nuestras leyes internas no encontramos disposiciones especiales de Derecho Internacional Privado, sobre alimentos, por cual deben aplicarse las reglas del Código Sánchez de Bustamante, y como norma supletoria, la disposición de índole más general sobre relaciones de familia, contenida en el Art. 14 del Código Civil. (Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil de Ecuador, 1968, págs. 727 - 730)

CONCLUSIONES

- El derecho que asiste a una persona para pedir alimentos, tiene como base fundamental el parentesco filial especialmente, así como la solidaridad familiar, lo que implica el deber moral de ayudarse, de socorrerse mutuamente en los momentos difíciles.

Desafortunadamente, y en relación a la investigación realizada cuando hay un divorcio de por medio por ejemplo, este deber moral de prestar alimentos, es prontamente olvidado y evadido, pues no es difícil encontrar a madres con sus hijos en brazos, requiriendo en los juzgados de la Niñez y la Adolescencia que el padre o la persona legalmente obligada a aquello, cumpla con la entrega de las pensiones de alimentos, pues son estas personas las que la ley ha llamado a cuidarlos, protegerlos. Adicionaré también que en muchas ocasiones la dilatada sustanciación de los juicios que por este derecho se tramitan coadyuva al incumplimiento y/o evasión del pago de la obligación de alimentos.

- Con la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Legislador aspiró que los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes, sean respetados y que por sobre todo se cumplan en la práctica. Sin embargo, no habrá ley que pueda suplantar la convicción individual que deben tener las personas llamadas por la ley para que cumplan con su obligación de proporcionar las pensiones de alimentos. Así como tampoco habrá ley que cale en la sensibilidad de los operadores de justicia para que tramiten esas causas de pensiones con la agilidad y prontitud que demanda el propósito de esta institución del derecho de familia.
- Pese a que los trámites para la fijación de las pensiones alimenticias, han sido auxiliados con la implementación de la tecnología en la Función Judicial. Todo se quedó en meras expectativas o poco ha sido lo que se ha avanzado. La información que deberían brindar los sistemas informáticos, en la mayoría de las ocasiones, no ha sido actualizada y en consecuencia, el acceso a una ágil y oportuna información, aún está por verse.

Hay que anotar además de que no todas las madres, en este caso, tienen acceso a la tecnología o no poseen conocimiento alguno sobre ella, por lo que esta implementación tecnológica no cumple siempre su aspiración.

- Las pensiones alimenticias fijadas por los jueces continúan siendo insuficientes ya que no alcanzan a cubrir las necesidades económicas de los menores, que no son solamente de alimentos, como mal se lo entiende en muchas ocasiones; sino que la prestación de alimentos abarca demás necesidades básicas como también lo son el vestido, educación, salud, recreación, etc. Si es que alguna vez queremos que se cumpla con el objetivo de lograr un desarrollo integral de los menores es necesario tomar en consideración aspectos más globales que tiendan justamente al cumplimiento de ese anhelo.(ver anexo 1)
- No es por falta de legislación que la administración de justicia en el caso de derecho de alimentos es, por decir lo menos, tarda. Existen normas procesales, como las contempladas en los artículos 735 y 736 del Código de Procedimiento Civil, que establecen procedimientos sumarios para los juicios de alimentos, pero en la práctica, se observa lo contrario. Lo que atenta contra el importante derecho de un sector vulnerable de la población como lo son las niñas, niños y adolescentes.
- Algunos operadores de la Función Judicial, hacen que la justicia ecuatoriana sea ciega y tenga las manos extendidas para recibir coimas, por lo que mientras no se corrija y se sancione de acuerdo a la ley este mal hábito de ciertos funcionarios, la sustanciación de las causas el general y no solo las de derecho de alimentos seguirán siendo onerosas e ineficientes.
- Mientras no se eduque a la población en valores, no habrá ley por coercitiva que sea, que pueda modificar la “viveza criolla” de ciertos padres, o personas obligadas por la ley, que piensan que pueden burlar a la justicia y evadir sus responsabilidades, incumpliendo sus obligaciones y compromisos que su paternidad implica.

- Durante el desarrollo de la investigación se he detectado con asombro, el hecho de que cuando se refiere a juicio de alimentos, se piensa generalmente por partes de las madres y padres especialmente, que solamente los niños pequeños, menores de 10 años, son sujetos de este derecho.

Pues consideran que cuando se trata de un adolescente, el padre en especial, piensa que este ya cuenta con edad suficiente para trabajar y mantenerse.

- Existen suficientes normas jurídicas, como las del Código Civil, Título XVI “de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas”, artículos 367 al 382; Las normas contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo, los niños/as y adolescentes no son atendidos en sus requerimientos fundamentales, pese a que la Constitución de la República así lo demanda, pues el derecho de alimentos atañe a los derechos fundamentales de una persona de un ser humano, pues busca su supervivencia.

RECOMENDACIONES

- Las normas procesales contempladas en el Código de Procedimiento Civil, específicamente, en los artículos 735 y 736, que establecen la calidad de sumario para el juicio de alimentos, sean cumplidas a cabalidad para que los juicios que versan sobre esta materia se despachen con mayor celeridad, en reciprocidad con el interés de protección que tiene esta institución del derecho de familia y que puede incluso catalogarse como un derecho humano.
- El Consejo de la Judicatura debería ejercer mayor control de los operadores, administradores y funcionarios que colaboran en la Función Judicial, posibilitando a los usuarios calificar la atención de los mismos.

Por ejemplo en caso de 3 quejas debidamente sustentadas, un mal funcionario debería ser destituido, esta propuesta se la presenta con el objetivo de lograr que la función judicial sea eficiente y eficaz, acorde con la necesidad de sus usuarios.

- Ofrecer a los funcionarios de la Función Judicial, sueldos que estén de acuerdo al volumen de trabajo y las responsabilidades inherentes, para evitar el pago de coimas y que así la justicia sea más ágil y eficaz.
- Implementar un sistema de seguimiento continuo de las causas para de esta manera evitar que se represen y que la justicia, la fijación de pensiones de alimentos, como es el caso de esta investigación, lleguen oportunamente a los que necesitan de ellas, como a los menores, cuyas necesidades no pueden esperar la voluntad de indolentes progenitores o descuidados funcionarios judiciales.
- Incrementar el número de Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, sería una alternativa válida y viable, para que los menores puedan obtener a tiempo el cumplimiento de sus pensiones alimenticias. Tal incremento debe ser realizado en base a la densidad poblacional de una circunscripción territorial. Así se podría descongestionar la tramitación de caudas de alimentos en las grandes urbes del país.

- Pensar en la posibilidad de crear un departamento de Servicio Social, adscrito al Consejo de la Judicatura, encargado de que, previa la fijación de la pensión alimenticia, haga un estudio de la real situación de los padres que deben pasar pensión alimenticia a sus hijos, para que ésta sea lo más justa y equitativa posible, con el fin de lograr su cabal cumplimiento, y que esta pensión cumpla con el objetivo de sustentar el desarrollo de un menor.

- Como parte de la función de los juzgados de la Niñez y la Adolescencia, sería investigar si los alimentantes pasan cumplidamente las pensiones alimenticias fijadas por los Jueces y Tribunales de la Niñez y la Adolescencia, de conformidad con lo establecido por los artículos 126 y 133 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

- Necesitamos assembleístas o por lo menos que las comisiones especializadas cuenten con asesores que tengan una formación en Derecho, en Derecho d Familia, en Derechos Humanos, para lograr que las leyes que se promulgue la función legislativa del Estado sean realmente eficaces y eficientes, para de esta manera evitar que haya proliferación de leyes dispersa y inconexas, que le cuestan al Estado y no cumplen con el propósito específico para el que fueron promulgadas.

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL

1. Albán Escobar, F. (s.f.). *Derecho de la Niñez y Adolescencia*.
2. Arias, J. (s.f.). *Derecho de Familia, Segunda Edición*. Editorial Kraft.
3. Arias, J. (s.f.). *Derecho de Familia, Segunda Edición*. Editorial Kraft.
4. Barros Errázuriz, A. (1931). *Curso de Derecho Civil*. Santiago de Chile: 4ta. Edición, Volumen 4.
5. Beltrán Heredia, P. (1958). *La Obligación Legal de Alimentos entre Parientes*. Salamanca.
6. Borja, L. F., Roger, R., & Chernovez, F. (1908). *Estudios sobre el Código Civil Chileno*. París: Impresores Editores.
7. Bossano, G. (s.f.). *Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Teoría General de las Obligaciones*.
8. Cabanellas, G. (1998). *Diccionario Jurídico Elemental*.
9. Cabanellas, G. (s.f.). *Diccionario de Derecho Usual*.
10. Cisneros Espinel, C. (1959). *Derecho Civil Ecuatoriano*. Quito.
11. Córdova, A. F. (s.f.). *Derecho Civil Ecuatoriano*.
12. Larrea Holguín, J. (1968). *Compendio de Derecho Civil de Ecuador*. Corporación de Estudios y Publicaciones.
13. Larrea Holguín, J. (s.f.). *Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador*.
14. Orbe, H. (1995). *Derecho de Menores, Edición Universidad Católica del Ecuador*. Quito-Ecuador: EDIPUCE, Editorial.

15. Osorio, M. (1982). *Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales*. Buenos Aires: Helista.
16. Rivas, L. (s.f.). *Ciencia Jurídica en la Legislación Ecuatoriana*.
17. Sánchez Zuraty, M. (s.f.). *Diccionario Básico de Derecho*.
18. Somarriva Undurraga, M. (s.f.). *Derecho de Familia*. Santiago de Chile: Editorial Nascimento S.A.
19. Tamés Peña, B. (s.f.). *Los Derechos del Niño, un Compendio de Instrumentos Internacionales*.
20. Torres Chávez, E. (2003). *Breves comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia*. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
21. Wray, A., García, E., & Larenas, R. (1999). *El Menor ante la Ley*". Quito-Ecuador: Edit. Nacional.

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA

1. Código Civil, Legislación Codificada, 2009
2. Código de Procedimiento Civil, 2005
3. Código de La Niñez y la Adolescencia, 2009
4. Constitución de la República del Ecuador, 2009

Anexo 1: Tabla de pensiones alimenticias 2014

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas 2014

NIVEL 1:

SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: **1SBU hasta 436 dólares**

Derechohabientes	Edad del/la alimentado/a	
	0 a 4 años (11 meses 29 días)	5 años en adelante
1 hijo/a	27,2% del ingreso	28,53% del ingreso
2 hijos/as	39,67% del ingreso	41,72% del ingreso
3 o más hijos/as	52,18% del ingreso	54,23% del ingreso

NIVEL 2:

SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: **437 hasta 1090 dólares**

Derechohabientes	Edad del/la alimentado/a	
	0 a 4 años (11 meses 29 días)	5 años en adelante
1 hijo/a	33,70% del ingreso	35,75% del ingreso
2 o más hijos/as	47,45% del ingreso	49,51% del ingreso

NIVEL 3:

SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: **1091 dólares en adelante**

Derechohabientes	Edad del/la alimentado/a	
	0 a 4 años (11 meses 29 días)	5 años en adelante
1 hijo/a o más	41,36% del ingreso	44,57% del ingreso

Los valores que se apliquen tendrán en cuenta la normativa vigente del salario básico unificado en función del régimen especial para la provincia de Galápagos.

El porcentaje de inflación anual determinado por el INEC es del 2,70%. El salario básico unificado -SBU- determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales para 2014 es de 340,00 dólares conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 0253.

Fuente: Consejo Nacional de la Judicatura

La elevación del Salario Mínimo Unificado a 340,00 dólares modificó el monto de las pensiones alimenticias, esta se calcula, como se ve en el cuadro, en base a los ingresos del alimentante, y en correspondencia al número de hijos de este. Se advierte sin embargo que los montos de estas pensiones resultarían ser insuficientes en la vida cotidiana.

Anexo 2: Formulario para demanda de alimentos.

Con la finalidad de facilitar la iniciación de la demanda de alimentos, el órgano ejecutivo de administración de justicia ha optado por emitir un comprobante para que la persona demandante solicite este derecho ante la autoridad competente sin la necesidad incluso de un abogado. Hay que anotar además que el formulario se puede descargar desde el internet.

Medida que busca celeridad en el proceso de reclamación del derecho de alimentos.

A continuación se presenta el formulario:



República del Ecuador
CONSEJO DE LA JUDICATURA



FORMULARIO ÚNICO PARA LA DEMANDA DE PENSIÓN ALIMENTICIA

SEÑOR /A JUEZ/A DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y/O MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN		
1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL ACTOR Y/O ACTORA		
A. Nombres y Apellidos	B. Nro. de Cédula	C. Edad
D. Estado Civil <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a <input type="checkbox"/> Unión Libre <input type="checkbox"/> Viudo/a		E. Profesión y/o Actividad
F. Lugar de Residencia	G. Dirección Domiciliaria (Cdla., barrio, calles, etc.)	
Nro. cuenta donde se depositará la pensión alimenticia		
H. Nro. Telefónico y/o Celular	I. Cuenta Juzgado	J. Cuenta Personal
K. ¿Labora en relación de dependencia? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	L. Nombre del Patrono donde labora	M. Ingresos mensuales aproximados

2. INFORMACIÓN PERSONAL DEL DEMANDADO/A (OBLIGADOS PRINCIPALES)		
A. Nombres y Apellidos	B. Nro. de Cédula	C. Edad
D. Estado Civil <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a <input type="checkbox"/> Unión Libre <input type="checkbox"/> Viudo/a		E. Profesión y/o Actividad
F. Lugar de Residencia	G. Dirección Domiciliaria (Cdla., barrio, calles, etc.)	
H. Nro. Telefónico y/o Celular	I. Correo Electrónico (opcional)	J. Nro. de hijos menores de 18 años
K. ¿Labora en relación de dependencia? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	L. Nombre del patrono donde labora	M. Ingresos mensuales aproximados

3. INFORMACIÓN PERSONAL DEL OBLIGADO/A SUBSIDIARIO/A (Llenar sólo en caso de ser demandado/s)		
A. Nombres y Apellidos	B. Nro. de Cédula	C. Edad
D. Estado Civil <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a <input type="checkbox"/> Unión Libre <input type="checkbox"/> Viudo/a		E. Profesión y/o Actividad
F. Lugar de Residencia	G. Dirección Domiciliaria (Cdla., barrio, calles, etc.)	
H. Nro. Telefónico y/o Celular	I. Correo Electrónico	J. Nro. de hijos menores de 18 años
K. ¿Labora en relación de dependencia? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	L. Nombre del patrono donde labora	M. Ingresos mensuales aproximados

4. HIJO/A O HIJOS/AS o BENEFICIARIO/A PARA QUIEN SE RECLAMA ALIMENTOS					
Nombres	Apellidos	Edad	Estudia	Nivel Educativo	Institución Educativa
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		

5. FUNDAMENTOS DE HECHO (RAZONES POR LAS QUE DEMANDA)

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO	
Arts. de la Constitución del Ecuador	44, 45, 69.1.5, 83.16
Arts. Convención Derechos del Niño	27, 29, 30, 31
Arts. Código Orgánico de Niñez y Adolescencia	20, 26
Innumerados de la Ley reformativa al Título V, Libro Segundo Código Orgánico de Niñez y Adolescencia (R.O. Nro. 643 del 28 de julio del 2009)	2, 4, 5, 15, 16
Otros Instrumentos:	

7. PRETENSIÓN DE LA DEMANDA
El pago de una pensión alimenticia mensual por cada hijo/a o beneficiario, más subsidios y otros beneficios legales.
Total USD \$

8. CUANTÍA
Según el número de hijos o alimentarios, sumar el valor de la pensión alimenticia reclamada por cada uno de ellos y multiplicar dicho monto por doce, según Art. 63 del Código de Procedimiento Civil.
Total USD \$

9. ESPECIFICACIÓN DEL TRÁMITE
Especial, determinado en el Art. Innumerado 34 y siguientes de la Ley reformativa al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, publicada en el R.O. Nro. 643, de julio 28 de 2009.

10. LUGAR DE NOTIFICACIÓN AL ACTOR/A	
Casilla Judicial Nro. (*)	Correo Electrónico

11. CITACIÓN AL OBLIGADO/A PRINCIPAL Y/O SUBSIDIARIO/A		Marcar	
Al demandado/s se los citará:		Principal	Subsidiario
a) Oficina de Citaciones		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Mediante Deprecatorio dirigido al señor Juez del Cantón:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Mediante Comisión dirigida a:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Mediante Exhorto dirigido a:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) A través de Notario Público		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Por boleta única de citación (personalmente con el apoyo de la fuerza pública)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Al tenor del Art. 82 del Código de Procedimiento Civil e inciso segundo del Art. innumerado 35 de la Ley reformativa al Título V, Libro Segundo del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, solicito se cite por la prensa al demandado/a.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ADJUNTA EL ACTOR		Marcar
a) Copia legible de cédula de ciudadanía		<input type="checkbox"/>
b) Copia legible de certificado de votación		<input type="checkbox"/>
c) Partidas de nacimiento de hijos/as		<input type="checkbox"/>
d) Prueba de representación del actor/a		<input type="checkbox"/>
e) Certificación bancaria, donde se justifique que el actor/a es titular de una cuenta corriente y/o ahorros, donde se depositará el valor de las pensiones fijadas		<input type="checkbox"/>
f) Certificado de estudios de hijos/as		<input type="checkbox"/>
g) Documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se pretendiere hacer valer en el juicio y que se encontraren en poder del actor/a		<input type="checkbox"/>
h) Prueba de la condición económica del alimentante		<input type="checkbox"/>
i) Certificado de discapacidad otorgado por el CONADIS y/o certificado médico		<input type="checkbox"/>
j) Certificados del Registro de la Propiedad del demandado/a		<input type="checkbox"/>
k) Certificado del Registro Mercantil		<input type="checkbox"/>
l) Certificados de trabajo del obligado/a principal o subsidiario y/o certificado IESS de relación de dependencia		<input type="checkbox"/>
m) Otros (especifique)		

13. SOLICITUD DEL ACTOR/A PARA LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS			
	Nombres	Apellidos	(*)Nro. Cédula
a) Testimonial			
b) Declaración de la contraparte (Confesión Judicial)			
c) Documental	Descripción		Marcar
	Certificado del SRI, respecto del pago del Impuesto a la Renta del demandado, o retenciones en la fuente, durante los últimos 2 años.		<input type="checkbox"/>
	Certificado de bienes del Registro de la Propiedad del cantón:		<input type="checkbox"/>
	Certificado del Registro Mercantil del cantón:		<input type="checkbox"/>
	Certificado sobre dominio de vehículos, de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre		<input type="checkbox"/>
	Certificado de cuentas bancarias y/o inversiones realizadas por el demandado durante el último año en los Bancos, Cooperativas de Ahorro y demás entidades del sistema financiero.	Especifique Entidad	
d) Otros (especifique)			

15. MEDIDAS CAUTELARES		Marcar
a) Que se prohíba que el demandado se ausente del país (consignar Nro. Cédula)		<input type="checkbox"/>
b) Que se prohíba que el demandado venda el vehículo (adjuntar certificado)		<input type="checkbox"/>
c) Que se prohíba que el demandado enajene el inmueble (adjuntar certificado)		<input type="checkbox"/>
Otras		

(*) Para consignar información adicional, hágalo en una hoja aparte.

Firma actor/a, representante o quien esté a cargo del cuidado del alimentario/a (obligatorio)	Nombre, firma y Nro. de Registro Profesional del Abogado (opcional)
---	---

Fuente: Consejo Nacional de la Judicatura

Encuesta realizada en la investigación

La encuesta fue realizada en base al siguiente rango de datos:

- Lugar: Quito –Ecuador
- Personas: personas usuarias del sistema de justicia, específicamente en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
- Número de personas encuestadas: de acuerdo al plan de la investigación fue a 50 personas, mayores de edad.

Pregunta realizada.

¿Cree usted que los juicios de alimentos se demoran en exceso en su tramitación?

Anexo 3: Tabla de resultados

Tabla 1: Resultado de la respuesta a la primera encuesta

¿Cree usted que los juicios de alimentos se demoran en exceso en su tramitación?

Resultados de la encuesta realizada	
Respuestas afirmativas	39
Respuestas negativas	3
No sabe	4
No contesta	4
Total personas encuestadas	50

Elaboración: El Autor

Según el resultado obtenido de la pregunta realizada en la encuesta No. 1, es evidente, que los usuarios, y usuarias de los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Quito, tienen una percepción de que los juicios de alimentos se demoran en exceso, lo que evidencia fallas procesales que dilatan el cumplimiento oportuno de la obligación de consignar alimentos, tal y como se presentó en la hipótesis de la investigación propuesta.

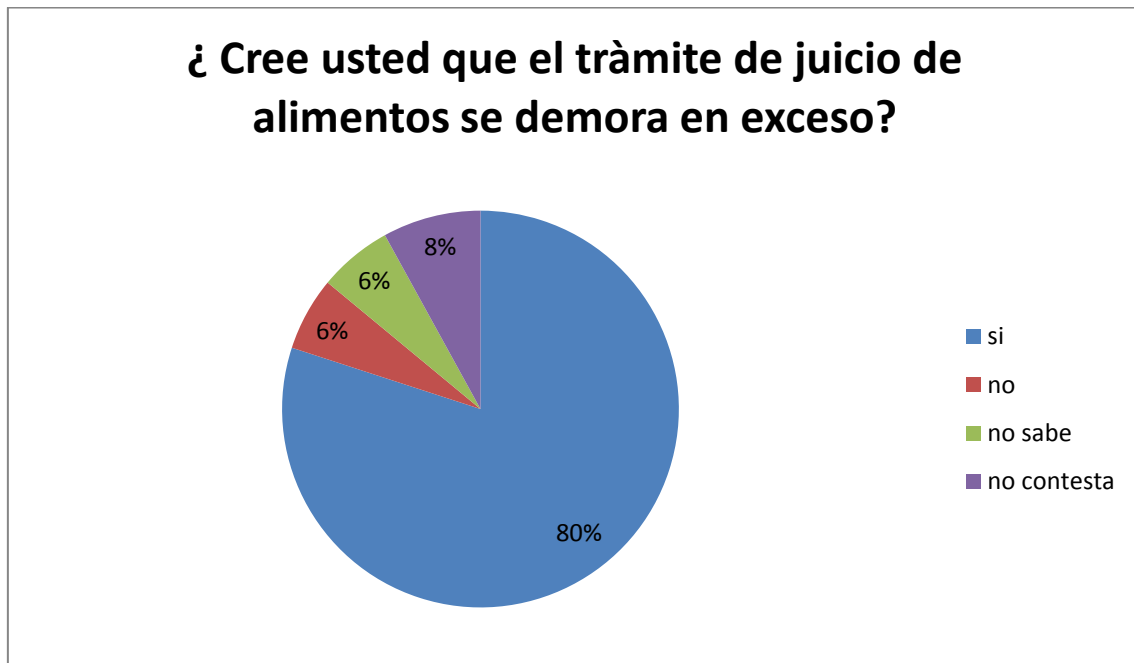
Tabla 2: Resultado de la respuesta a la segunda encuesta

¿Cree usted que las pensiones alimenticias fijadas por los jueces competentes son suficientes para la manutención de los menores?

Resultados de la encuesta realizada	
Respuestas afirmativas	6
Respuestas negativas	41
No sabe	2
No contesta	1

Elaboración: El Autor

Gráfico 1: Resultados de la pregunta 1 de la investigación.

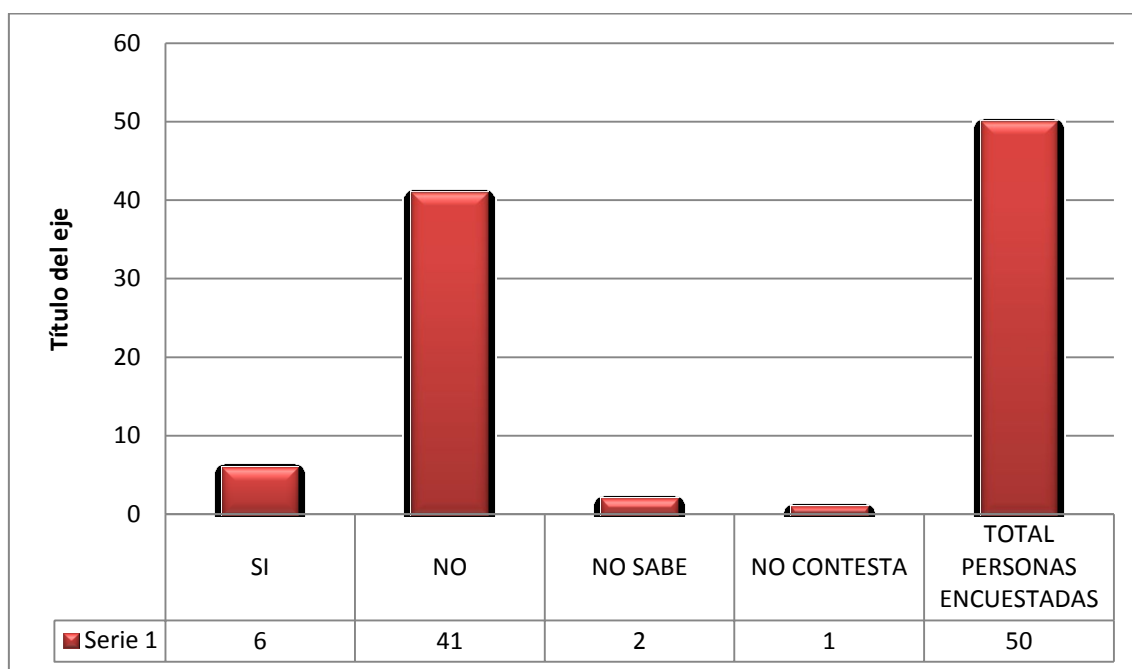


Elaboración: El Autor

El 80% de los usuarios encuestados en la ciudad de Quito, consideran que la sustanciación de los juicios de alimentos se demoran desmesuradamente. Situación que, como en varios pasaje del trabajo presentado, atenta contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Gráfico 2: Resultados de la pregunta 2 de la investigación.

¿Cree usted que las pensiones alimenticias fijadas por los jueces competentes son suficientes para la manutención de los menores?



Elaboración: El autor

La mayoría de las y/o los individuos encuestados consideran insuficientes los montos de las pensiones alimenticias fijadas por los Jueces. Es decir estas no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de los menores, lo pone en serio riesgo una educación, alimentación, salud, y recreación, integral de este sector vulnerable de la población. De ahí la propuesta presentada en el apartado pertinente sobre la necesidad de realizar un verdadero seguimiento y estudio sobre la fijación de los montos de las pensiones, así como también el cumplimiento de estas.